

**UNIVERSIDAD ESAN**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES**  
**DERECHO CORPORATIVO**



Trabajo de Suficiencia Profesional (sustentación de expedientes) para optar el  
Título Profesional de Abogado

Informes Jurídicos sobre los expedientes N° 04565-2008-0-1817-JR-CO-02 y  
N° 1323-2005

**Autora:**  
Sol Angela Gutierrez Astocondor

**Código de la alumna:**  
11100557

Lima, 2021

## **INFORME JURÍDICO DEL PRIMER EXPEDIENTE**

### **DATOS DEL BACHILLER**

Nombres y Apellidos : Sol Angela Gutierrez Astocondor  
Código de alumno : 11100557  
Correo electrónico : [11100557@ue.edu.pe](mailto:11100557@ue.edu.pe)  
[sol\\_angela1994@hotmail.com](mailto:sol_angela1994@hotmail.com)

### **DATOS DEL EXPEDIENTE**

Materias : Modificación de denominación social  
Procedencia : Corte Suprema de Justicia de la Republica  
Expediente N° : 04565-2008-0-1817-JR-CO-02  
Código Esan : 2016 - 104  
Demandante : RENTING S.A.C  
Demandados : RENTING PERÚ S.A.C

## 1. ANTECEDENTES

1. Mediante Escritura Pública de fecha 02 de julio del 2004, otorgada ante el Notario Público del Callao, el Dr. J. Antonio Vega Erasquin, se constituyó la empresa RENTING S.A.C, debidamente registrada e inscrita el 22 de julio del 2004 en el Asiento A00001 de la Partida Electrónica N°11667075 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; cuyo objeto social es el de *dedicarse al arrendamiento, compra, venta, comodato, consignaciones e importaciones de toda clase de vehículos de transporte terminados o en partes, así como los materiales necesarios para la actividad de los mismos, y todos los negocios jurídicos conexos que puedan surgir de estos, así como podrá dar y/o arrendar, comprar, vender refaccionar y/o habilitar bienes inmuebles para ser utilizados como talleres de reparación o mantenimiento, salones de exposición, entre otros.*
2. Posteriormente, mediante Escritura Pública de fecha 05 de enero del 2006, otorgada ante el Notario Público, la Dra. Cecilia Hidalgo Morán, se constituyó sociedad RENTING COLOMBIA S.AC, inscrita el 15 de enero del 2007 en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N° 11967863 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; cuyo objeto principal es *dedicarse a dar en arrendamiento a personas naturales, jurídicas, vehículos automotores incluidos no limitados a camiones, flotas, motocicletas montacargas, tracto camionetas, remolques, camionetas o camperos. Este comprende, celebrar contratos de compra- venta de vehículos o partes de los mismos, compra- venta de repuestos para mantenimiento, y contratar mantenimiento de los mismos, así como administración y operación de vehículos, inclusive flotas de terceros, contratar seguros; contratar o subcontratar personal de manejo y operaciones de vehículos, así como podrá importar y exportar vehículos, entre otros.*

Ahora bien, con Escritura Pública de fecha 22 de enero del 2007 otorgada ante el Notario Público, la Dra. Cecilia Hidalgo Morán y Acta de Junta General Universal de Accionistas del 19 de enero del 2007 se acordó cambiar la denominación social de RENTING COLOMBIA S.AC a REINTING PERÚ S.A.C, tal como se registra en el Asiento B00001 de la Partida Electrónica N° 11967863 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.

3. Que, desde la fecha que se efectuó dicha modificación al momento que se incoa el proceso, la empresa RENTING PERÚ S.A.C ha utilizado dicha denominación para identificarse en todos los actos y aspectos que comprende su personarí jurídica, lo cual genera confusión ante distintas entidades privadas y particulares, ante la parecida

denominación social y actividades realizadas por las partes, lo cual vulnera lo previsto en el artículo 09 de la Ley General de Sociedades (en adelante, “LGS”)<sup>1</sup>.

## 2. HECHOS RELEVANTES

### ***Relación de los hechos sobre los que versa la controversia de la que trata el expediente***

#### **1. Demanda**

1.1. Que, la empresa RENTING S.A.C (en adelante, la “**Demandante**”) interpuso la demanda sobre Modificación de denominación social “RENTING PERÚ.S.A.C” en contra RENTING PERÚ.S.A.C (en adelante, el “**Demandado**”)

Las pretensiones planteadas por la Demandante fueron las siguientes:

- a) Primera Pretensión principal: Modificación de denominación social “RENTING PERÚ.S.A.C” por otra distinta que no se asemeje bajo ninguna consideración o concepto con la de la empresa demandante.
- b) Pretensión Accesorio: Pago de costos y costas correspondientes al proceso incoado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 410° y conexos del Código Procesal Civil.

1.2. Los fundamentos de hecho que la Demandante presentó fueron los siguientes:

- a) De la Primera Pretensión Principal:
  - La Demandante señala que de manera inequívoca la denominación social RENTING PERU S.A.C es muy semejante a su sociedad, previamente constituida y registrada, toda vez que “RENTING” es un elemento distintivo que los identifica como empresa, y con la cual realiza su actividad económica desde el año 2004.
  - Asimismo, la finalidad jurídica del artículo 09 de la LGS es impedir la coexistencia de denominaciones sociales que por su identidad o semejanza puedan inducir a las entidades públicas o privadas en general

---

<sup>1</sup>“Artículo 9.- Denominación o Razón Social La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello (...)”

a confusión o error respecto de la verdadera identidad, existencia y origen de cada sociedad.

- Ahora bien, es menester precisar que la semejanza de la denominación social no es solamente la que genere la confusión, sino que, además la sociedad demandada tiene la misma forma societaria (Sociedad Anónima Cerrada) y objetos sociales similares, dedicándose a prestar servicios de alquiler, compra venta e importaciones de vehículos.
- Adicionalmente, la conducta de la empresa demandada viene generando gran confusión no solo a los clientes de la parte accionante, sino que también al público en general, al efectuar publicaciones en medios de comunicación masivos como “RENTING”, tal como se advierte en la página VI del Diario “Gestión” del 26 de abril del 2007.
- En ese sentido, lo señalado en el párrafo anterior queda debidamente acreditado con los oficios, invitaciones, facturas, correos, declaraciones juradas y revistas provenientes de distintas entidades que ratifican de manera inequívoca la semejanza de la denominación social de las partes del presente proceso; generando confusión, errores de percepción, contaminando la publicidad y difusión de sus servicios en el mercado.
- Por último, el artículo 49° de la LGS<sup>2</sup> establece que las pretensiones del socio o cualquier tercero contra la sociedad, respecto a los cuales no se hay establecido expresamente un plazo, caducan a los dos años a partir de la fecha correspondiente al acto que motiva la pretensión.
- En ese sentido, la empresa demanda cambio su denominación social el 22 de enero del 2007 mediante Escritura Pública, e inscrita el 01 de febrero del 2007, por lo que se advierte que el plazo a la fecha de interposición del presente proceso no ha caducado, más aún tomando en cuenta el principio erga omnes de la publicidad registral; y, por lo tanto, la acción que ampara la petición de la demandante se encuentra vigente y plenamente facultados y legitimados para ejercerla.

b) De la Pretensión Accesorio:

---

<sup>2</sup> “Artículo 49.- Las pretensiones del socio o de cualquier tercero contra la sociedad, o viceversa, por actos u omisiones relacionados con derechos otorgados por esta ley, respecto de los cuales no se haya establecido expresamente un plazo, caducan a los dos años a partir de la fecha correspondiente al acto que motiva la pretensión”

- La empresa demandante solicita que la empresa infractora efectúe el pago de costas y costos, correspondientes a los artículos 410° y 411° del Código Procesal Civil<sup>3</sup>.

1.3. Los fundamentos de derecho que la Demandante presentó fueron los siguientes:

- Los artículos 09° y 49° de la LGS
- Artículos 424°, 425° y el numeral 8 del art. 567 del Código Procesal Civil

1.4. La vía procedimental en la que se solicitó que se tramitará la demanda es vía de Sumarísimo ante un Juzgado Civil Sub-especializado en lo Comercial.

1.5. Los medios probatorios que la Demandante ofreció fueron los siguientes documentos

- (i) Copia Certificada completa de la Partida Electrónica N° 11667075 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, que detallan la constitución de la empresa accionante, acreditando que esta fue registrada e inscrita el 22 de julio del 2004 con la denominación social "RENTING S.A.C"
- (ii) Copia Certificada completa de la Partida Electrónica N° 11967863 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la empresa demandada.
- (iii) Copia del artículo publicado en la página VI de la edición del Diario "Gestión" de fecha 25 de abril del 2007
- (iv) Documentos que acreditan la confusión generada de las semejanzas existentes con la denominación social, dirigidas a la RENTING PERU S.A.C y notificadas a la empresa accionante, los cuales son:

- Copia de la invitación del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
- Copia del correo electrónico remitido por PERÚ PUBLICATIONS S.A.C
- Copia de invitación remitida por SFIDA

---

<sup>3</sup> "Artículo 410.- Costas.-

*Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso.*

Artículo 411.- Costos.-

*Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutuo y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial."*

- Copia de Factura N°150-0047673 de fecha 22 de junio del 2007 girada por el GRUPO PANA S.A. (Concesionario de Toyota)
  - Copia de impresión de correo electrónico emitido por el Gerente General de NEXTEL PERÚ S.A.C
  - Copia de la Declaración Jurada de Impuesto vehicular de un vehículo nuevo adquirido por la sociedad infractora.
  - Copia de una invitación dirigida por COPORATION POLICIAL
  - Copia de Carta remitida por SUR MOTORS, adjuntando la Factura N° 001-0019008 de fecha 26 de febrero del 2008 cancelada por los servicios brindados.
- (v) Copia de la Sentencia de Casación de fecha 05 de julio del 2005 signada con el Expediente N° 737-2004 por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica.
- (vi) Copia de la pag. 04 del Boletín N°57 del Manual Societario de la Editorial Economía y Finanzas S.R.L. del cual se desprende la parte pertinente de la Sentencia de fecha 15 de septiembre del 2006 expedida por la Primera Sala Civil Sub-especializado Comercial de Lima, signado con el expediente N° 954-2006.

## **2. Contestación de Demanda**

La empresa demandada contestó la demanda con fecha 03 de septiembre de 2008, solicitando que sea declarada infundada, así como que se le imponga a la parte actora el pago de costos y costas, en base a los siguientes fundamentos de hecho:

- a) Reconoce que las partes cuentan con la palabra RENTING como denominación social, debido a que se dedican a prestar servicios de arrendamiento de vehículos automotores; sin embargo, la palabra RENTING constituye un término descriptivo del servicio que brindan, y por tanto se encuentran legitimados para usarlo dentro de su denominación social.
- b) Para la empresa demandada, estos configuran la excepción prevista en el artículo 09 de la LGS, es decir, que se puede utilizar una denominación similar siempre y cuando se demuestre estar legitimado para ello.

- c) El presente proceso no incide en los hechos sino en la calificación jurídica, toda vez que corresponde determinar si nos entramos dentro de la excepción prevista en la norma acotada en el párrafo anterior, por tanto, tampoco es injerencia de la presente Litis si el termino RENTING en la denominación social genera confusión en los consumidores.
- d) Dicha confusión es irrelevante, y de ser el caso, esto se debe atribuirse a la empresa demandada misma al haber utilizado como único término “RENTING” como denominación social que versa sobre la naturaleza de sus servicios; y en todo caso, las diversas comunicaciones dirigidas a la empresa demandada pero notificadas a la accionante, perjudican a su empresa, y no a quien dice recibirla.
- e) En ese sentido, la empresa demandante ha utilizado un término genérico descriptivo, esto es un signo que informa directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que se aplica; y por tanto, no distingue ni particulariza por si solo ni al producto o servicio ni a las empresas que se dedican al mismo rubro u objeto social, e incluyen dicho termino en su denominación.
- f) Por consiguiente, al ser un término descriptivo no es susceptible de ser utilizado como reserva o exclusividad en la denominación social, porque constituiría una barrera de acceso a cierto sector del mercado, lo cual sería equivalente a un monopolio, motivo por el cual estas denominaciones pueden ser libremente utilizados por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
- g) Finalmente, se debe precisar que la palabra “RENTING” es utilizada comúnmente en el mercado para referirse una clase específica de servicios, tal como así lo describe la misma página web del accionante que se encuentran adjuntos a su vez con un listado de partidas de sociedades que dentro de su denominación se encuentra dicho termino.

### **3. Audiencia Única**

Mediante la actuación procesal de fecha 13 de enero del 2009 <sup>4</sup> se fijan los siguientes puntos controvertidos:

---

<sup>4</sup> En vista que el presente proceso es sumarísimo corresponde la aplicación del artículo 554 del Código Procesal Civil, modificado por el Decreto Legislativo 1070.



- Determinar si la empresa demandada RENTING PERÚ S.A.C. ha incurrido en la prohibición de adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la empresa demandante REANTING S.A.C., y de ser el caso, ordenar la modificación de la denominación social.

Asimismo, mediante la referida resolución se señala como Audiencia de Pruebas para el día 12 de abril del 2010 a las 9:30 am en el local del Juzgado<sup>5</sup>.

#### **4. Sentencia de Primera Instancia**

##### ***Resolución N° 16 - Sentencia emitida por el Segundo Juzgado Civil Sub-especialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima***

4.1. Mediante Resolución N° 16 de fecha 26 de enero de 2009, el Segundo Juzgado Civil Sub-especializado en lo Comercial falló: FUNDADA la demanda interpuesta, y en consecuencia, ORDENA el cambio de denominación social de la empresa RENTING PERÚ S.A.C deberá efectuarlo en el plazo de 20 días hábiles, debiendo adoptar una nueva denominación social completa y abreviada distinta a la de la demandante RENTING S.A.C, debiendo anotarse aquella resolución en la Partida Registral N° 11967863, por las siguientes principales razones:

- a) Que, el nombre de las empresas es propio y exclusivo, por lo que no pueden existir dos empresas con la misma denominación o razón social, siendo que dicha exclusividad abarca tanto la fonética y la semántica, salvo autorización de la preexistencia o demuestra legitimidad para ello.
- b) Que, de la valoración de los medios probatorios obrante en autos se advierte que la empresa accionante acredita su preexistencia ante la empresa demandada.
- c) Ahora bien, de acuerdo al artículo 16° del Reglamento del Registro de Sociedades N° 200-2001-SUNARP-SN prevé que: *“se entiende que existe igualdad cuando hay total coincidencia entre una denominación y o razón social con otra preexistente en el índice, cualquier sea la forma societaria adoptada. También existe igualdad, en las variaciones de matices de escasa significación tales como el uso de las mismas palabras con la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones o signos de puntuación; el uso de las mismas palabras en diferente orden, así como del singular y el plural”*

---

<sup>5</sup> La empresa demandada no asistió a la audiencia. Asimismo, se admitió los medios probatorios extemporáneos presentados por la parte demandante, y se rechazaron los puntos 4 y 5 de la demanda en virtud a que no son considerados en sí como medios probatorios.

- d) Cabe señalar, que la denominación social de las partes no es igual toda vez que Registros Públicos no rechazó la denominación social modificada (RENTING PERU S.A.C.) en merito a lo previsto en su reglamento, por lo que resulta atendible verificar si existe semejanza entre la demandante y demandado y determinar si hay perjuicio con dicha similitud.
- e) Ahora bien, del análisis efectuado a ambas denominaciones sociales, se advierte la existe de semejanza semántica y fonética, y que esta causa perjuicio ya que de la revisión de los medios probatorios se exhibe una gran confusión dentro de mercado de ambas empresas, máxime si de la lectura efectuada a la ficha registral de inscripción de la empresa demandada se exhibe que tiene objeto social similar a la de la empresa demandante.
- f) Por último, respecto a los argumentos señalados por la parte demandada respecto a la legitimidad que posee para usar el término RENTING por ser este, descriptivo de la actividad de arrendamiento operativo de vehículos y por su uso común en el mercado; debe señalarse que los argumentos esgrimidos están referidos al derecho de marca el cual no se está cuestionando en esa instancia, más aún cuando se establece por reiterada jurisprudencia que la excepción señalada en el artículo 09 de la LGS hace alusión a cuando la sociedad preexistente sin haber adquirido personería jurídica hubiese estado operando en el mercado durante una considerable cantidad de tiempo en el cual se haya hecho notoriamente conocida por el público, motivo por el cual debe desestimarse dichos argumentos.

## 5. Apelación<sup>6</sup>

5.1. Con fecha 17 de febrero de 2009, la empresa demandada presentó el recurso de apelación contra la Resolución N° 16, por los siguientes argumentos:

- a) El juez ha valorado de forma incorrecta el artículo 16° del Reglamento de Registro de Sociedades N°200-2001-SUNARP-SN, cuando señala en su séptimo considerando que :

*“se entiende que existe igualdad cuando hay total coincidencia entre una denominación y o razón social con otra preexistente en el índice, cualquier sea la forma societaria adoptada (...)”*

---

<sup>6</sup> La Apelación fue concedida mediante Resolución N° 17 de fecha 10 de marzo de 2009.

En el presente caso no hay coincidencia entre las denominaciones sociales, toda vez que la palabra “PERÚ” hace la distinción entre ambas, por tanto, no hay igualdad.

*“(…) También existe igualdad, en las variaciones de matices de escasa significación tales como el uso de las mismas palabras con la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones o signos de puntuación; el uso de las mismas palabras en diferente orden, así como del singular y el plural”*

En este supuesto, el juzgado sustenta su fallo interpretándolo de forma errónea, debe precisarse que no existe la adición de artículo alguno, ya que la palabra “PERU”, que hace la distinción, no es un artículo, así como tampoco no cuenta con espacios, matices, guiones y demás mencionados.

- b) En ese sentido, de seguir la premisa indicada por el juzgado, la empresa accionante pretendería que todas las sociedades, en las cuales su objeto social sea servicio de RENTING, varíen sus denominaciones sociales si es que cuentan con dicha palabra.

Asimismo, se advierte que la resolución materia de impugnación no ha valorado que el termino RENTING tiene naturaleza descriptiva, la cual les otorga legitimidad.

Al respecto, es menester precisar que el artículo 09 de la LGS es la protección de la razón o denominación de las sociedades, de manera que la sociedad preexistente pueda oponer su derecho a la reserva y exclusividad de su denominación a otra que pretende utilizarla, en forma completa o abreviado, exceptuando cuando se cuenta con legitimidad para ello.

- c) Por último, se sentencia carece de una debida motivación y violenta el debido proceso toda vez que se contradice en el octavo, noveno y décimo primero fundamentos.

En el octavo considerando señala que las denominaciones sociales de las partes no son iguales en virtud a que al momento de calificar la inscripción de la parte demandada esta no fue el titulo hubiera sido rechazado por Registros Públicos; para luego contradecirse con lo indicado en el artículo 09 de la LGS.

De otro lado, respecto al décimo primer considerando que desvirtúa los fundamentos alegados por la parte demandante, respecto a que los argumentos alegados corresponden al derecho de marca, materia que no se discute en su instancia; para luego efectuar una semejanza fonética y semántica, haciendo alusión a dicha norma.

## **6. Sentencia de vista<sup>7</sup>**

### ***Resolución N° 20 – Sentencia de la Primera Sala Civil Superior Sub especializada en materia comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima***

Mediante Resolución N° 20 de fecha 28 de enero de 2010 emitida por la Primera Sala Civil Superior Sub Especializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, REVOCA la Sentencia contenida en la Resolución N° 16 de fecha 26 de enero de 2009, REFORMANDOLA a INFUNDADA, por las siguientes razones:

- a) Que, el artículo 09 de LGS comprende tres supuestos: a) No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente; b) no se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombre de organismos institucionales públicas, c) no se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor; en los tres casos existe la excepción referida a cuando se demuestre la legitimidad para usar dicha denominación.

En el presente caso el petitorio de la demanda se ampara en el primer supuesto de la norma que surge respecto a la confusión de los términos de denominación social y nombre comercial. Si bien para la adopción de una denominación social no se establece parámetros ni limitación alguna, también lo es que dicho concepto o pueden integrar fonemas del tipo descriptivo o distintivo sobre los cuales no se puede exigir exclusividad.

- b) En cuanto a la defensa de la empresa demandada, solo sería pertinente, si se trata de discutir una inscripción de marca que identificara un producto o servicio.

---

<sup>7</sup> Mediante la Resolución N° 07 de fecha 23 de octubre del 2009 se señaló que había discordia en los votos de los magistrados, por tanto en conformidad con el artículo 144° de La Ley Orgánica del Poder Judicial, llamaron a un vocal dirimente designado por ley, señalando como fecha de vista de causa para el día 04 de diciembre del 2009.

Ahora bien, el artículo 207 de la Ley de Propiedad Industrial nos dice que:

*“Se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica”*

Por tanto, la marca es un título que concede un derecho de exclusividad que puede solamente ser utilizado por un operador porque identifica en el mercado el servicio o producto que brinda, por eso pueden ser marcas palabras, imágenes, símbolos, entre otros; lo que de ninguna manera puede aplicarse al vocablo RENTING, porque este representa un tipo de contrato mercantil por el cual brindan un servicio comercial que no solo brinda la empresa apelante, sino que cualquier otra sociedad que brinda dicho servicio.

- c) En ese sentido, no resulta adecuado que la sociedad posea dicha denominación por ser la única en utilizarla ya que RENTING es un término descriptivo, es decir, describe una figura comercial, por lo que se determina que si existe legitimidad para utilizar dicha denominación.

En consecuencia, dicho termino no es reivindicable, lo que sanciona la ley es la similitud que puede crear riesgos de confusión entre los consumidores, el termino RENTING que se invoca describe una actividad comercial, y no es una creación que individualice a la demandante, por lo que no se puede alegar vulneración a su denominación.

## **7. Interposición del Recurso de Casación<sup>8</sup>**

7.1. Con fecha 08 de marzo de 2010 la empresa demandante interpuso un Recurso extraordinario de Casación contra la Sentencia de Vista, contenida en la Resolución N°20, de fecha 18 de julio de 2012, por los siguientes argumentos:

- a) Interpretación errónea de la última parte del artículo 09 de la LGS que nos dice que “(...) salvo cuando se demuestre legitimidad para ello”.

Esto en virtud a que en la Sentencia de Vista se reconoce la semejanza de las denominaciones sociales, y que por ello se ve obligada a interpretar

---

<sup>8</sup> Mediante Resolución de fecha 02 de agosto del 2010, se declaró PROCEDENTE el Recurso de Casación.

equivocamente el supuesto de legitimidad para rechazar por ello nuestra demanda.

- b) Inobservancia del literal a) del inciso 24 del artículo 02 de la Constitución Política del Perú, al pretender restringir el derecho a adoptar una denominación social que no está prohibida en la LGS y considerarla inadecuada, y con ello impedir que se pueda proteger bajo la aplicación de un supuesto de legitimidad que la demandada no tiene.
- c) El primer error del magistrado consiste en aplicar normas de derecho de marcas y propiedad industrial a un caso que pertenece netamente al derecho societario, regulado por la LGS.

En ese sentido, el artículo 09 de la LGS no establece limitación alguna respecto a la adopción de la denominación social que una sociedad pueda optar.

- d) De la misma forma, el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil establece limitaciones o restringe derechos que no se aplica por analogía, lo cual ha sucedido en el presente caso al aplicar por analogía la Ley marcas y propiedad industrial.
- e) Que, la LGS busca proteger la identidad de las personas jurídicas y sus relaciones civiles y en la vida cotidiana con otras personas y entidades, así de evitar la confusión de esta individualidad otorgada; y no buscar evitar la confusión de los consumidores.
- f) De otro lado, la legitimidad a la que se refiere el artículo 09 de la LGS consiste en un derecho otorgado a que pretende tener una denominación social semejante a otra, es decir, contar con licencia o autorización por ser parte de una familia de empresas, por ser titular de una denominación previamente inscrita su nombre, o por haber adquirido bajo cualquier título derecho a ello; pero no pretendiendo extender el efecto del derecho de propiedad industrial.

En la Sentencia impugnada se declara que existe legitimidad de la demanda de llevar una denominación social semejante a la empresa accionante, dado a que esta denominación describe el servicio o tipo mercantil, lo cual generaría que cualquier sociedad podría amoldar su objeto social o denominación social teniendo en cuenta términos y fonemas utilizados que describen algún servicio.

- g) Por último, la Sentencia impugnada omitió aplicar el texto expreso en el artículo 09 de la LGS que regula que *no se puede adoptar una denominación completa o abreviada semejante a la otra sociedad preexistente*; toda vez que al estar comprobada la semejanza de la denominación social de la empresa infractora y de la accionante, además de la confusión de identificación que ello conlleva, se debió aplicar el texto expreso precisado líneas arriba y confirmar la sentencia de primera instancia.

## **8. Sentencia – CAS N° 1085-2010**

8.1. Mediante Resolución de fecha 10 de diciembre de 2010 expedido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República se declara: (i) FUNDADO el recurso de casación interpuesto por RENTING S.A.C y en consecuencia NULA la Sentencia de Vista (Resolución N° 20) de fecha 28 de enero de 2010 expedida por la Primera Sala Civil Sub- especializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, (ii) CONFIRMARON la Resolución N° 16 de fecha 26 de enero del 2009 en cuanto declaró FUNDADA la Demanda, por los siguientes fundamentos:

- a) El artículo 09 de la LGS debe interpretarse de forma literal, es decir, en el sentido esta determina la ilicitud de la adopción de nombres que por su igualdad o semejanza con otras sociedades pueda inducir al público confusión. Este numeral regula dos supuestos facticos para su aplicación: a) la semejanza de una denominación o razón social de dos o más sociedades; b) la igualdad entre una denominación o razón social de dos o más sociedades.

Que, para los efectos de los mencionados supuestos facticos se debe entender el término “semejante” a el parecido con algo o alguien; y respecto a la palabra “igual” como aquella que es de la misma naturaleza, cantidad o calidad de otra cosa.

En el caso en concreto, del análisis del nombre de las denominaciones sociales de las partes del presente proceso, se advierte que se configura una semejanza, toda vez que cuentan con fines y objeto social similares, debiéndose precisar que en el tercer párrafo del artículo 09 de la LGS- establece que esta prohibición no tiene en cuenta la forma social.

- b) Ahora bien, del análisis efectuado a la Sentencia de Vista se verifica que la Sala Superior ha interpretado el artículo 09 de la LGS en el sentido que las denominaciones sociales deben ser idénticas<sup>9</sup>, omitiendo el supuesto de semejanza, lo cual resulta una interpretación errónea exigiendo más supuestos del que la norma establece<sup>10</sup>, por tal motivo el recurso merece ser amparado.

### **3. PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE**

#### ***Identificación de los principales problemas del expediente***

A lo largo de lo señalado en el presente informe, se han podido identificar ciertos problemas jurídicos relevantes en los que versa la controversia del presente expediente, los cuales detallaré en la presente sección.

Es por eso que de la revisión y del análisis del expediente, he podido advertir e identificar los siguientes principales problemas jurídicos:

#### **3.1. Determinar el alcance del artículo 9 de la LGS**

El problema principal en el que se centra el presente expediente, y sobre el cual se ampara la pretensión de la demanda, es la correcta aplicación del artículo 9 de la LGS, por lo que resulta necesario determinar el alcance de dicha norma, así como los supuestos aplicables al presente caso.

El mencionado dispositivo legal establece la prohibición de adoptar una denominación igual o semejante a la de otra sociedad preexistente. En ese sentido, la demandante sustenta su pretensión en la semejanza existente entre las denominaciones sociales debido a que ambas poseen la palabra RENTING como parte de su denominación.

Por su parte, la demandada contradice dicha posición argumentando que la palabra RENTING describe una amplia gama de servicios relacionados al alquiler, compraventa de vehículos, entre otros; por lo que no puede prohibir a la empresa demandada la utilización del mismo en su denominación social, toda vez que dicho término es descriptivo del servicio que brinda, y por consiguiente, se encuentra

---

<sup>9</sup> La Sentencia casada señala que "(...) en el presente caso se ha determinado que no existe similitud entre las denominaciones sociales de las empresas en debate (...) lo que existe un tipo simultaneo de un tipo genérico, que no debe ser interpretado por igualdad (...)")

<sup>10</sup> La Sentencia casada señala que "(...) se pedirá el cambio de denominación o razón social, solo en la medida en que el nombre igual pudiese generar problemas tributarios, penales, mercantiles y civiles (...)")



legitimado para utilizado dentro de su denominación social, encontrándose dentro de la excepción prevista en el artículo 09 de la LGS<sup>11</sup>.

Si bien, en las diversas instancias hemos observado que existe una interpretación literal del artículo 9°, a excepción de la sentencia de segunda instancia, dicho dispositivo legal no menciona si para configurarse la semejanza es necesario solo hacer una análisis semántico y fonético de las denominaciones sociales o si resulta pertinente evaluar otros criterios como, por ejemplo, el ámbito territorial en el cual operan las sociedades, el nivel de afectación producido como consecuencia de la similitud de ambas denominaciones, similitud de objeto social, entre otros.

En ese sentido, dicho vacío de la norma genera las siguientes interrogantes: ¿la semejanza debe producir necesariamente una confusión en los usuarios del mercado o solo basta que se verifique la existencia de una similitud entre las denominaciones sociales para que el derecho del demandante sea tutelado? ¿la semejanza deberá generar problemas tributarios, penales, civiles o comerciales para que el juez ordene el cambio de denominación social a la empresa infractora?

Asimismo, como se mencionó previamente, el art. 9 de LGS establece una prohibición de carácter relativa puesto que establece una excepción: podrán adoptar una denominación igual o semejante aquellos que demuestren legitimidad para ello. Sin embargo, la legislación societaria y registral no se pronunciaba al respecto ya que solo se limitaba a expresar dicha excepción, más no a determinar en qué casos se configuraba la misma.

Por tal motivo, y con la finalidad de darle respuesta al presente problema, resulta necesario analizar los siguientes subproblemas relacionados a este problema:

---

<sup>11</sup>“Artículo 9.- Denominación o Razón Social La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado.

No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.

Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social.

No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello.

El Registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente. En los demás casos previstos en los párrafos anteriores los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la denominación o razón social por el proceso sumarisimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición (...).”

**3.1.1. ¿La palabra RENTING tiene naturaleza descriptiva de la actividad y, por ende, no puede ser utilizado de manera exclusiva por una sola sociedad?**

Como ya ha sido mencionado anteriormente, la demandante fundamenta su pretensión en la prohibición de adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente.

Por el contrario, la empresa demandada sostiene que la palabra RENTING no puede ser exclusiva de la demandante toda vez que ésta describe una serie de servicios relacionados a brindar alquileres de vehículos, y que incluso es ampliamente conocido y utilizado en el mercado

Por tanto, en la siguiente sección vamos a analizar la naturaleza del término RENTING, así como evaluar si dicha palabra es descriptiva y genérica.

**3.1.2. ¿La demandada ha demostrado legitimidad para adoptar una denominación semejante?**

Otro subproblema que considero importante de analizar a fin de darle respuesta al problema mencionado en el numeral 3.1. de la presente sección, es si el argumento de la demandada – poseer legitimidad sobre el término RENTING – configura la excepción prevista por el artículo 9 de la LGS.

Es importante mencionar que la demandada más allá de cuestionar la semejanza entre las denominaciones sociales de la demandante y la suya, enfatiza reiteradamente que tiene legitimidad sobre el término RENTING por ser descriptivo de la actividad de arrendamiento operativo de vehículos

En tal sentido, en la siguiente sección analizaré cuál es la excepción que la misma norma indica; y que la LGS no precisa, dejando al A quo el deber de esclarecer dicha incertidumbre jurídica.

**3.2. Determinar la aplicación de normas del Derecho de la Propiedad Intelectual a un caso de Derecho Societario**

A lo largo del análisis del expediente se advierte que, en las indistintas instancias judiciales, se cuestiona si es legal conceder el termino RENTING de forma exclusiva

a una sola empresa, apoderándose esta última de una denominación social ampliamente utilizada por y para el público interesado en dicho sector del mercado, lo cual podría ser considerado un monopolio.

En ese escenario, es importante mencionar que en el Derecho Societario no se establecen parámetros ni limitación alguna para la adopción de una denominación social, por tal motivo la sentencia de la Sala recogió algunos criterios del Derecho de la Propiedad Intelectual, como es la imposibilidad de utilizar términos descriptivos de una actividad.

En contraposición, la Corte Suprema señaló que aplicar normas del Derecho de la Propiedad Intelectual a un caso que pertenecer al Derecho Societario es una interpretación equivocada y que resulta inaplicable por tratarse de materias de derecho ajenas. Asimismo, se menciona en la sentencia que existe un error en la interpretación del precitado artículo 09 de la LGS ya que esta no establece límites en la adopción de la denominación social que la sociedad decida tener; más aun tomando en consideración que la Casación N° 737-2005-Chincha ha determinado que la interpretación de dicha norma es literal.

En tal sentido, en la siguiente sección analizaré si la interpretación de dicha norma da cabida a una interpretación sistemática de las normas de Derecho de la Propiedad Intelectual al caso concreto y, por consiguiente, el término RENTING no es reivindicable.

### **3.3. Determinar si se ha producido una afectación al demandante derivado de la semejanza de las denominaciones sociales**

El principal argumento que sustenta la pretensión de la demandante es la confusión generada entre sus clientes y público en general como consecuencia de la similitud de ambas denominaciones sociales, acreditado a través de los medios probatorios presentados donde se puede observar que continuamente han recibido comunicaciones dirigidos a la demandada.

En ese sentido, como hemos visto, uno de los problemas del presente expediente es la ausencia de criterios objetivos que permitan establecer cuando resulta razonable ordenar la modificación del nombre de la sociedad presuntamente infractora.

Por ello, y al no existir criterios objetivos, en la presente sección vamos a analizar la interpretación y valoración de los medios probatorios realizado por las diferentes

instancias, a fin de determinar si dichos documentos acreditan una real afectación a la demandante y, por ende, su denominación social merecía protección.

### **3.4. Determinar si se incurrió en un vicio de motivación en el proceso**

Como último punto controvertido que considero pertinente desarrollar es determinar si existió un vicio o infracción normativa en la cual se haya incurrido en el desarrollo del presente proceso.

En ese sentido, considerando pertinente analizar si en las distintas instancias habría existido un vicio por falta de motivación y, con ello, se habría afectado el derecho al debido proceso de las partes.

Habiendo determinado todos los problemas jurídicos detectados en el presente expediente, en la siguiente sección procederé a explicar mi posición personal respecto de cada uno de los mismos.

## **4. POSICIÓN PERSONAL RESPECTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE**

### ***Posición fundamentada sobre cada uno de los problemas del expediente***

En relación a los principales problemas jurídicos identificados en la Sección III anterior, a continuación, mi posición personal respecto de cada uno de ellos:

#### **4.1. Determinar el alcance del artículo 9 de la LGS**

Conforme se desprende de los hechos, el problema principal sobre el que versa la presente controversia radica en determinar el verdadero alcance del supuesto de hecho contenido en el segundo párrafo del artículo 9 de la LGS.

##### **4.1.1. Antecedentes normativos**

Antes de analizar los problemas jurídicos del presente expediente es preciso mencionar que, a la fecha, el precitado artículo ha sufrido de diversas modificaciones. Los antecedentes de nuestra actual LGS tienen como punto de partida la Ley de Sociedades Mercantiles, aprobada el 27 de julio de 1966 a través de la Ley N° 16123. Posteriormente, se promulgó la LGS a través del Decreto Legislativo N° 311 de 1984, siendo posteriormente modificada por el Decreto Supremo N° 003-85-JUS de fecha 13 de mayo de 1985 que da origen al Texto Único Concordado de la LGS; todas las normas antes

mencionadas repiten prácticamente lo ya esbozado por la Ley N° 16123<sup>12</sup>. En ese contexto, el artículo 71 del Texto Único Concordado de la LGS, establecía lo siguiente:

*“Artículo 71.- La sociedad anónima podrá adoptar cualquier denominación, pero deberá figurar necesariamente la indicación "sociedad anónima" o las iniciales "S.A.". Cuando se trate de sociedades cuyas actividades sólo puedan desarrollarse por sociedades anónimas de acuerdo con la ley, el uso de la indicación o de las iniciales es facultativo.*

*No se podrá adoptar una denominación igual a la de otra sociedad preexistente.*

*La acción para obtener la modificación de la denominación igual debe seguirse en el domicilio de la sociedad demandada, tramitándose conforme al procedimiento señalado para los incidentes. Contra lo resuelto por la Corte Superior no hay recursos de nulidad” (el subrayado es nuestro)*

Debido a que nos encontrábamos rigiéndonos por una legislación societaria cuya antigüedad superaba los 30 años, en 1994 se consideró necesario reformular dicho cuerpo normativo a través de la actual Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. En relación a la adopción de denominaciones iguales o semejantes, la norma cambia considerablemente lo establecido en el precitado artículo, de acuerdo a los siguientes términos:

*“Artículo 9.- Denominación o Razón Social*

*La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado.*

*No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello (...) (el subrayado es nuestro)”*

Como se puede observar, el artículo 9 amplía el espectro de protección que estableció el artículo 71 de la anterior LGS, el cual solo limitaba la prohibición a denominaciones sociales que sean iguales.

---

<sup>12</sup> Daniel Echaiz Moreno, *Informe sobre la legislación societaria peruana*, Recuperado de: <https://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista9/societaria.htm>

De acuerdo a la exposición de motivos, se propuso dicha modificación ya que se consideró que la antigua ley resultó ser muy restrictiva en cuanto ésta solo otorgaba protección a un nombre prácticamente igual, por tal razón se decidió ampliar la protección a los nombres de las sociedades conjuntamente con la incorporación de reglas sobre la reserva registral de nombre que permitirán a una empresa en formación salvaguardar el nombre que se pretende usar<sup>13</sup>

Ahora bien, cabe precisar que el presente expediente data del año 2008, y por ende, la norma aplicable al caso fue el artículo 9 de la Ley 26887, redactado como ha sido previamente señalado. Sin embargo, resulta necesario, a fin de analizar íntegramente dicho dispositivo legal, advertir que en el año 2017 el mencionado artículo sufrió nuevamente una modificación a través de la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1332, quedando redactado de la siguiente forma:

*“Artículo 9.- Denominación o Razón Social*

*La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado.*

*No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello. (...) (el subrayado es nuestro)”*

Cabe resaltar que la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1332 señala que la modificación del artículo 9 se realiza a efectos de suprimir la palabra “semejante”, con el propósito de eliminar la discrecionalidad del registrador, privilegiando así la literalidad en el registro de la denominación o razón social.<sup>14</sup>

Hasta este punto hemos podido advertir con gran asombro que el artículo 9 ha variado constantemente, agregando y, posteriormente, eliminando la palabra “semejante” del dispositivo legal, dejándolo en la misma situación en la que se encontraba antes. Nuevamente subrayo que la última modificación no es aplicable al expediente, pero si contribuye al análisis que pretendemos realizar en esta sección y que fundamentará mi posición.

#### **4.1.2. Delimitación conceptual**

---

<sup>13</sup> Exposición de Presentación del Proyecto de Ley General de Sociedades hecha por el Dr. Enrique Normand Sparks, Presidente de la Comisión Redactora, a la Comisión Revisora del Congreso de la República.

<sup>14</sup> Exposición de motivos del Decreto Legislativo que Facilita la Constitución de Empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE.

Con el propósito de ser identificados en el ámbito comercial y empresarial, todas las sociedades necesitan contar con un nombre que permita identificarlos tanto para el cumplimiento de sus obligaciones como para el ejercicio de los derechos otorgados por el ordenamiento jurídico para el desarrollo de sus actividades empresariales. En tal sentido, el nombre social permite identificar a los sujetos que forman parte del ámbito empresarial y, a su vez, este nombre social permite diferenciarlos del conjunto de empresas con las que coexiste dentro del mercado.

Según lo señalado por Tabra Ochoa<sup>15</sup>, el nombre social individualiza, en primer lugar, la forma de funcionamiento que adoptará una sociedad comercial en el mercado. También, delimita su forma de funcionamiento, estructura y gobierno. El nombre social es el instrumento que publicita la conducta de la sociedad comercial; cómo ha de desenvolverse desde el momento de su constitución, o desde que decide reorganizarse y debe cambiar de identidad societaria. Así, el nombre social es importante para la sociedad comercial porque individualiza e identifica su rol como persona jurídica, el de sus socios y su forma de funcionamiento.

En virtud de ello, el nombre social se clasifica en denominación social y razón social, ambos conceptos cumplen la misma función, pero su uso dependerá del tipo de sociedad. Por un lado, la denominación social se usa para identificar a las sociedades en donde sus socios tienen responsabilidad limitada y responden solo hasta la pérdida total del capital social. El concepto de denominación social se asocia con el uso de nombres de fantasía y esta puede incluir el nombre de alguna persona física, socio o no socio. Por otro lado, la razón social es aquel nombre que identifica a las sociedades de responsabilidad ilimitada y dentro de la misma pueden incluirse, de forma parcial o completa, los nombres de uno o más socios, o cualquier otra persona que no sea socio, esta última asumirá automáticamente la misma responsabilidad que le corresponde a los socios, es decir responsabilidad ilimitada.

#### **4.1.3. Funciones de la Denominación Social**

De todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que tanto la denominación social y la razón social tiene como finalidad principal individualizar y distinguir a las sociedades del universo de sociedades que existen en el mercado. Entre las principales funciones de la denominación sociales destacan las siguientes:

- (i) Función diferenciadora:

---

<sup>15</sup> Edison Paul Fabra Ochoa, *La Ley General de Sociedades. Estudios y comentarios a veinte años de su vigencia*, (Perú: Gaceta Jurídica, 2018), 78.

Como ya lo hemos mencionado, tanto la denominación social y la razón social buscan identificar e individualizar a la persona jurídica. Por un lado, la identificación implica verificar y comprobar la identidad de una sociedad. En cambio, individualizar a una sociedad consiste en determinar a los sujetos por las características particulares, para distinguirlos y diferenciarlos de lo demás existentes.<sup>16</sup>

Cuando una sociedad es identificada e individualiza lo que se logra es que sea diferenciada de las demás sociedades con las que coexiste en un determinado mercado.

(ii) Función informativa:

En palabras de Núñez Velásquez <sup>17</sup>, mediante la denominación social y la razón social de una persona jurídica se pueda dar a conocer el tipo societario que ha sido adoptado por la sociedad en cuestión, lo que permite determinar el grado de responsabilidad que los accionistas o socios han asumidos al constituir una sociedad.

#### **4.1.4. Diferencias con el Nombre Comercial**

Primigeniamente es mester precisar que la marca es un signo empleado para distinguir y diferenciar productos o servicios en el mercado<sup>18</sup>, cuyas características principales son: una representación gráfica y una aptitud distintiva. Esta puede constituirse por palabras, dibujos, letras, números, objetos y demás figurativos.

Ahora bien, esta tiene como propósito facilitar la decisión del consumidor al momento de adquirir un servicio o producto, en el sentido que permite identificar aquellos que son conocidos, ya sea por publicidad o calidad.

En ese sentido, no solo debe diferenciar productos o servicios, sino que también permite diferenciarlos dentro de la propia empresa de que son originarios. Esta función es la primordial para definir los alcances de la protección de marcas.

---

<sup>16</sup> Paulo Cesar Lopez Ayala, *Sobre el Nombre Comercial y el Nombre Comercial: "Distinguiendo a los que distinguen"*, Recuperado en: [http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/Cathedra/1998\\_n3/Sob\\_Nom\\_Com\\_Nom.htm](http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/Cathedra/1998_n3/Sob_Nom_Com_Nom.htm)

<sup>17</sup> Sofía Núñez Velásquez, *Nombre comercial y denominación social: diferencias, conflictos y regulación aplicable*, (Lima: Rey de los Ríos - Abogados, 2008), 74.

<sup>18</sup> Fuente: [www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)



En esa línea, el nombre comercial es un signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil, y que sirve para distinguirla de las demás empresas que podrían desarrollar actividades idénticas o similares; mientras que el nombre comercial es todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil<sup>19</sup> que puede o no ser la misma que la denominación social.

Este nombre comercial no puede ser separado de la empresa misma, ya que en caso que se produzca una transmisión el público podría ser inducido a confusión, al confiar de la existencia de cierta empresa, tras un nombre comercial, cuando por el contrario la empresa es cuestión podría ser diferente. Es pues esta estrecha vinculación que conduce a un eventual reputación o crédito que no se indica tanto a las cualidades objetivas del empresario, sino a elementos plurales y variados dispuesto por aquel para el ejercicio de su actividad económica.

De otro lado, respecto a la denominación social es aquel que identifica a una persona jurídica en el tráfico mercantil como sujeto de relaciones jurídicas, y por tanto, susceptible a derechos y obligaciones.

En ese sentido, una persona jurídica que cuenta con una denominación social puede tener varios nombres comerciales para identificar varias actividades económicas a diferentes sectores; sin embargo, al momento de celebrar un contrato, en este debe figurar la denominación social.

#### **4.1.5. Análisis del artículo 9**

La denominación social es un elemento esencial para la constitución de una sociedad puesto que en el artículo 53 de la LGS se establece que la constitución de una sociedad anónima se realiza por los fundadores, al momento de otorgar la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto. En relación al estatuto, el artículo 55 inc. 1 menciona que este debe contener -obligatoriamente- la denominación de la sociedad que se pretende constituir.

En ese sentido, es importante mencionar que la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas tiene naturaleza constitutiva de derechos ya que otorga a una sociedad el derecho exclusivo de la denominación a partir de la inscripción en el registro correspondiente. Asimismo, existe la Reserva de Preferencia Registral que otorga el derecho a proteger la denominación social de sociedades que se encuentran en el proceso de constitución por un plazo de 30 días hábiles.

---

<sup>19</sup> Sierra Noguero Eliseo, (2009), Curso de Derecho Mercantil (Grado de Relaciones Laborales), 4ta Edición, Editorial Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona España, p. 77

Ahora bien, respecto a la elección de la denominación social se observa que no existen en el derecho societario parámetros ni limitación alguna para su adopción, pudiendo adoptarse cualquier denominación que se estime pertinente. No obstante, la libertad para adoptar una denominación social no resulta ser absoluta ya que el artículo 9 de la LGS ha establecido las siguientes prohibiciones:

- Adopción de denominación social igual, completa o abreviada a otra sociedad preexistente, salvo que se cuente con legitimidad.
- Adopción de denominación social que contenga nombre de organismos o instituciones públicas.
- Adopción de denominación social que contenga signos distintivos protegidos por el derecho de propiedad industrial, salvo que se cuente con legitimidad para ello.
- Adopción de denominación social que contenga elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se cuente con legitimidad para ello.

Respecto a la primera prohibición, el artículo 16 del Reglamento del Registro de Sociedades considera que dos denominaciones son iguales cuando:

*“Artículo 16.- Igualdad de denominación o de razón social*

*Se entiende que existe igualdad cuando hay total coincidencia entre una denominación o una razón social con otra preexistente en el Índice, cualquiera sea la forma societaria adoptada.*

*También existe igualdad, en las variaciones de matices de escasa significación tales como el uso de las mismas palabras con la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones o signos de puntuación; el uso de las mismas palabras en diferente orden, así como del singular y plural”.*

De acuerdo a una lectura del artículo previamente citado se entiende que el criterio de igualdad se clasifica de dos formas:

- Cuando existe una total coincidencia entre las denominaciones sociales.
- Cuando existe matices de escasa significación.

Respecto a los matices de escasa significación, Tabra Ochoa sostiene que “la igualdad por “matices de escasa significación” se presenta en cuatro modalidades: 1) el nombre social posee modificaciones mediante la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones o signos de puntuación; 2) el nombre

social posee las mismas palabras en diferente orden; 3) el nombre social usa las mismas palabras en plural; 4) el nombre social usa las mismas palabras el singular<sup>20</sup>

El Tribunal Registral se ha pronunciado respecto a la procedencia de la inscripción de denominaciones sociales que tienen una palabra en común toda vez que las mismas están conformadas por palabras adicionales que permiten descartar cualquier tipo de confusión entre ellas y, por ende, no encajan en el supuesto de igualdad propiamente dicho ni tampoco en el supuesto de escasa significación<sup>21</sup>.

Ahora bien, respecto al concepto de semejante, ningún dispositivo legal se pronuncia al respecto, solo se limita a establecerlo como una prohibición, pero no hace referencia a cuando existe semejanza entre dos denominaciones sociales<sup>22</sup>.

Sin perjuicio de las prohibiciones antes mencionadas, el artículo ha dispuesto mecanismos de protección cuando se violan algunas de estas prohibiciones. El primero tiene carácter preventivo (ex ante) ya que otorga al registrador la facultad para observar y rechazar todas aquellas solicitudes de inscripción de sociedades con denominaciones, completa o abreviada, igual a otra sociedad preexistente. Esta facultad otorgada por el artículo 9 establece que, de oficio, el registrador puede rechazar la inscripción de una sociedad con una denominación igual a la de otra sociedad inscrita previamente, esta prerrogativa no alcanza a la sociedad de denominación semejante, a pesar que en la práctica el artículo 16 del Reglamento del Registro de Sociedades establece que existe igualdad cuando se utilicen las misma palabras con la adición o supresión de artículo, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones o signos de puntuación, el uso de las mismas palabras en diferente orden, así como del singular al plural.

Por otro lado, el segundo mecanismo de protección tiene carácter correctivo ya que no otorga una prerrogativa al registrador de rechazar la inscripción; por el contrario, el registrador deberá proceder con el respectivo registro y el afectado tendrá la legitimidad procesal de solicitar el cambio de denominación social vía proceso sumarísimo.

#### **4.1.6. ¿La palabra RENTING tiene naturaleza descriptiva de la actividad y, por ende, no puede ser utilizado de manera exclusiva por una sola sociedad?**

Para empezar, Renting es un anglicismo que se refiere a una modalidad de alquiler o arrendamiento de bienes. Desde un punto de vista jurídico, el Renting se define como un contrato atípico de alquiler a largo plazo a través del cual una compañía adquiere un bien

---

<sup>20</sup> Edison Paul Fabra Ochoa, *Ob. Cit.*, 90.

<sup>21</sup> Resolución N° 708-2011-SUNARP-TR-L, de fecha 25 de mayo del 2011.

<sup>22</sup> Echaiz Moreno Daniel, *Propuestas para una reforma de la legislación societaria en el Perú*, (Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2005), pp. 209

nuevo, a solicitud de su cliente, y lo pone a disposición de este por un plazo de tiempo determinado a cambio de una contraprestación mensual.

Así, el renting es un contrato de arrendamiento de media o larga duración, naciendo como una fórmula para solucionar las necesidades ocasionales o temporales de bienes muebles. El renting está principalmente indicado para aquellos empresarios que necesitan hacerse con el uso de ciertos bienes para el desarrollo empresarial. En esos casos no se trata de una necesidad ocasional, sino que ésta se utilizará durante un periodo largo de tiempo, a menudo durante toda su vida útil. Asimismo, se debe tomar en consideración que a través del renting el arrendatario recibe no solo el uso del bien, sino también una serie de servicios necesarios para su óptimo disfrute, tales como mantenimiento, seguros, bien de reemplazo, etc<sup>23</sup>.

En resumen, el renting es un tipo de contrato atípico que consiste en el arrendamiento a largo plazo de bienes como equipos y vehículos, los cuales no contempla la opción de compra al final del periodo contratado<sup>24</sup>.

Ahora bien, la demandante Renting S.A.C. tiene como objeto social el siguiente:

*“Dedicarse al arrendamiento, compra, venta, comodato, consignación e importación de toda clase de vehículos de transporte, terminados o en partes, así como de los materiales necesarios para la actividad de los mismos, y de todos los negocios jurídicos que alrededor de los fines especificados pueden efectuarse”*

Por otro lado, la demandada Renting Perú S.A.C. tiene el siguiente objeto social:

*“Dedicarse a dar en arrendamiento a personas naturales o jurídicas, vehículos automotores, incluidos, pero no limitados, a camiones, flotas, motocicletas, montacargas, tracto camiones, remolques, camionetas o camperos.*

*En desarrollo del objeto social principal, la sociedad podrá celebrar contratos de compraventa de vehículos o partes para los mismos, celebrar contratos de compraventa de repuestos para mantenimiento, contratar el mantenimiento de los mismos, contratar la administración y operación de los vehículos, incluso de flotas de terceros, contratar seguros, contratar o sub-contratar personal para el manejo y operación de los vehículos (...)*”

---

<sup>23</sup> Bravo Melgar, Sidney Alex, *Contratos modernos: contratos atípicos e innominados*, (Perú: Ediciones Legales), 2010, p. 453-456

<sup>24</sup> Farina, Juan M, *Contratos Comerciales Modernos: Modalidades de contratación empresarial, Tomo II*, (Buenos Aires: Editorial Astrea), 2005, p. 97-100.

Como se puede observar, las dos empresas se dedican a brindar servicios de arrendamiento de vehículos, resulta razonable que ambas sociedades hayan decidido utilizar el término Renting como parte de su denominación social ya que por sí solo la palabra hace referencia directa a los servicios que brindan.

Sobre el particular, la Casación N° 1890-2001-LIMA se pronuncia sobre el uso de términos genéricos y descriptivos en las denominaciones sociales:

*“Noveno:*

*Que, en ese sentido se tiene que el término maquinarias es un término genérico, utilizado para designar tanto objetos como actividades, sin que por sí sola represente productos o servicios, o identifique a determinada persona jurídica, por lo mismo, no puede ser considerada como nombre propio y que su inscripción como parte integrante de una denominación específica genere derechos exclusivos a su titular, con respecto al uso de dicha denominación genérica (maquinarias)”* [Subrayado es nuestro]

La Corte Suprema ha tenido un interesante pronunciamiento sobre el uso de términos genéricos en las denominaciones sociales manifestando que, por su propia naturaleza, no son distintivas ya que solo aluden a la actividad comercial y, en consecuencia, podrán ser utilizados por distintas sociedades como parte de su denominación social.<sup>25</sup>

En contraposición a lo mencionado previamente, la Sentencia emitida por el Segundo Juzgado Civil Sub Especializado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima (en adelante, “Sentencia de Segunda Instancia”) se refirió al uso de términos descriptivos de la siguiente manera:

*“Décimo Primero:*

*Que con respecto a los argumentos de la demandada sobre la legitimidad que tiene para usar el término RENTING por ser este, uno descriptivo de la actividad de arrendamiento operativo de vehículos y por su uso común en el mercado, tal como lo sustenta con la copia de la Resolución N° 2217-2007-TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 298577-2006, y los distintos documentos presentados en los que se aprecia su uso por otras empresas, cabe señalar que lo argumentado está referido al derecho de marca que no está discutiendo en esta instancia (...)”* [Subrayado es nuestro]

---

<sup>25</sup> Ricardo Beaumont Gallirgos, *Comentarios a la Ley General de Sociedades*, (Perú: Gaceta Jurídica, 2006), pp. 68

En relación a este pronunciamiento, considero que el uso de términos descriptivos o genéricos no es propio únicamente del derecho de marcas ya que también puede alcanzar a las denominaciones sociales, como en el presente caso.

Siguiente el criterio de la Casación N° 1890-2001-LIMA, la sentencia de la Primera Sala Civil Sub Especializada en Materia Comercial (en adelante, "Sentencia de Segunda Instancia") se pronuncia al respecto en los siguientes términos:

*"Sétimo:*

*Que, la palabra renting define el contrato de alquiler a largo plazo de un vehículo incluyéndose en sus cuotas mensuales una serie de prestaciones individuales, con el objetivo de que al pagar la mensualidad el usuario no tenga que preocuparse de otros aspectos relativos al mantenimiento y legalización del vehículo, en el contrato no figura opción de compra al final del periodo del contrato, también se conoce este contrato como un "leasing operativo". Por ello, no resulta adecuado que la sociedad posea dicha denominación pretenda ser la única en utilizarla ya que el renting es un término descriptivo, es decir, describe una figura comercial. De tal forma que se determina que si existe legitimidad de la demandada para usar dicha denominación." [Subrayado es nuestro]*

En efecto, como lo menciona la Sentencia de Segunda Instancia, el término Renting representa la actividad comercial que realizan ambas sociedades, no en vano optaron por utilizar dicho término como parte de su denominación social ya que el mismo permite identificarlos automáticamente como empresas que brindan el servicio de arrendamiento de vehículos.

En mi opinión, una palabra o término es descriptivo cuando por sí sola representa y expresa su naturaleza, en este caso considero que Renting por sí sola representa, tanto en inglés como en español, una modalidad de arrendamiento. Desde mi punto de vista, no pensaría que una empresa que tenga como parte de su denominación social la palabra Renting realice algo distinto a brindar servicios de arrendamiento.

En ese sentido, considero que el término Renting es descriptiva de la actividad ya que indica directamente la forma como se llevará a cabo la prestación de los servicios, esto es, a través de la suscripción de un contrato de renting.

Si bien, dentro de nuestra regulación societaria no existen limitaciones o parámetros para optar una denominación social, considero que la función de la misma en el tráfico jurídico es, básicamente, la de individualizar e identificar a la sociedad; en

consecuencia, la demandada ha cumplido con elegir de buena fe una denominación que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado, a diferencia de la demandante que al elegir como denominación social una única palabra carente de capacidad diferenciadora y que, además, tiene carácter descriptivo y genérico, induce a error y confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad.

España, a diferencia de Perú, tiene más desarrollado el concepto de igualdad<sup>26</sup>:

*“Artículo 408. Concepto de identidad*

*Se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:*

- 1. La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número.*
- 2. La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, de escasa significación.*
- 3. La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética.*

*Los criterios establecidos en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª del apartado anterior no serán de aplicación cuando la solicitud de certificación se realice a instancia o con autorización de la sociedad afectada por la nueva denominación que pretende utilizarse.*

*En la certificación expedida por el Registrador Mercantil Central se consignará la oportuna referencia a la autorización. La autorización habrá de testimoniarse en la escritura o acompañarse a la misma para su inscripción en el Registro Mercantil.*

*Para determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones se prescindirá de las indicaciones relativas a la forma social o de aquellas otras cuya utilización venga exigida por la Ley”*

---

<sup>26</sup> Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil

En efecto, el concepto de igualdad en la regulación española cuenta con mayor precisión y establece la posibilidad de la coexistencia pacífica de dos denominaciones iguales siempre que se cuente con el consentimiento de la empresa afectada.

Asimismo, la regulación española incluye el concepto de términos o expresiones genéricas en las denominaciones sociales y tiene una lista con la relación de palabras o expresiones genéricas o carentes de virtualidad diferenciadora, tales como inmobiliarias, industria, distribuidora, mercantil, grupo, sociedad, transporte, entre otras<sup>27</sup>:

*“(…) 3. Los términos o expresiones genéricas o accesorias, a que se refiere la regla 2. del artículo 373.1 del Reglamento del Registro Mercantil, serán apreciados por el registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos estará a disposición del público en el registro mercantil central y en todos los registros mercantiles”.* [Subrayado es nuestro]

Como se puede observar, la legislación societaria española cuenta con mayor regulación sobre la materia lo que permite a las sociedades tener predictibilidad y seguridad jurídica sobre el desarrollo de sus actividades empresariales. En ese sentido, el Derecho Comparado nos ayuda a precisar algunos conceptos, así como a enriquecer y adaptar nuestras instituciones jurídicas tomando como referente a otros ordenamientos que han logrado solucionar problemas jurídicos similares<sup>28</sup>.

#### **4.1.7. ¿La demandada ha demostrado legitimidad para adoptar una denominación semejante?**

El artículo 9 de la LGS establece que la regla general es que ninguna sociedad puede elegir un nombre igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, sin importar la forma social. Sin embargo, el mencionado artículo incluye una salvedad a dicha prohibición legal: si es posible adoptar una denominación igual o semejante si se demuestra legitimidad para ello.

Sobre la base de esta excepción, la demandada en la contestación de la demanda sostiene que se encuentra legitimada para tener una denominación similar a la de la demandante puesto que el término RENTING es meramente descriptivo y, por ende, no es susceptible de ser utilizado con reserva o exclusividad en la denominación social de una sola sociedad.

---

<sup>27</sup> Orden de 30 de diciembre de 1991, sobre el Registro Mercantil Central. Consultado el 29 de agosto en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-1569>

<sup>28</sup> Sotomayor Cáceres Roxana, *Apuntes introductorios al derecho comparado*, (Lima: Themis Revista de derecho, 2018), pp.59



Pero, ¿Cómo se entiende dicha excepción? Etimológicamente, legitimidad es una cualidad de legítimo y proviene de *legitimus*, es decir, lo que es conforme a Ley o a Derecho. En el lenguaje jurídico, legítimo puede ser entendido como “adecuado a los principios y valores del ordenamiento jurídico” o “causa que justifica la realización de una conducta penalmente sancionada, eximiendo de responsabilidad a su autor”<sup>29</sup>.

Para el año 2008, fecha en la cual se interpuso la demanda, ningún dispositivo normativo especificaba cuando nos encontrábamos dentro de dicha excepción y, en consecuencia, cuando una sociedad contaba con legitimada para adoptar una denominación social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente.

Lo mismo no sucede para los casos de conservación de nombre del socio fallecido o separado, ya que el artículo 9 de la LGS establece de forma expresa que una sociedad puede conservar el nombre del socio fallecido o del separado siempre que el mismo o sus sucesores presten su consentimiento, lo cual hace referencia al concepto de legitimidad<sup>30</sup>.

Por otro lado, el artículo 28 de la Resolución N° 086-2009-SUNARP<sup>31</sup>, Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias, menciona lo siguiente:

*“Artículo 28.- Inscripción del nombre*

*No procederá la inscripción del nombre completo o abreviado de una persona jurídica cuando:*

- a. Induzca a error o confusión sobre el tipo de persona jurídica;*
- b. Haya igualdad con otro nombre completo o abreviado, sea cual fuere el tipo de persona jurídica inscrita con anterioridad o amparada por la reserva de preferencia registral, durante el plazo de vigencia de ésta;*

---

<sup>29</sup> Diccionario panhispánico del español jurídico

<sup>30</sup> “Artículo 9.- Denominación o Razón Social

(...) La razón social puede conservar el nombre del socio separado o fallecido, si el socio separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello. En este último caso, la razón social debe indicar esta circunstancia. Los que no perteneciendo a la sociedad consienten la inclusión de su nombre en la razón social quedan sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal si a ello hubiere lugar”.

<sup>31</sup> La Resolución N° 086-2009-SUNARP-SN, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-04-2009, aprobó el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias (en adelante RIRPJNS), la cual pretendió regular las inscripciones de las personas jurídicas en un registro denominado: “Registro de Personas Jurídicas No Societarias”. Sin embargo, es de señalar que de conformidad con literal b) del artículo 2 de la Ley N° 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos, y el artículo 2024 del Código Civil, dicho registro jurídico no se encuentra previsto legalmente.

- c. *El nombre abreviado no esté compuesto por una o más palabras o primeras letras o primeras sílabas de todas o algunas de las palabras que integran el nombre completo, en el orden que éste se presente.*

*También existe igualdad en las variaciones de matices de escasa significación, tales como el uso de las mismas palabras en distinto orden o en singular y plural; o, con la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, tildes, guiones o signos de puntuación.*

Excepcionalmente, procederá la inscripción del nombre completo o abreviado en los supuestos del párrafo anterior, si la persona que tiene su derecho al nombre protegido conforme a las disposiciones legales vigentes, autoriza su uso mediante decisión del órgano competente” [Subrayado es nuestro]

La mencionada Resolución establece que una sociedad puede adoptar la denominación social igual a la de otra sociedad preexistente siempre que se autorice su uso; lo cual, en otras palabras, nos señala que la excepción que hace mención el artículo 9 de LGS respecto a la legitimidad para adoptar una denominación igual o semejante a la de otra es que dicha sociedad permita o consienta su utilización.

Sin embargo, ambas concepciones de legitimidad no podrían ser aplicable por analogía a los casos de semejanza de denominaciones sociales, ya que a diferencia de la igualdad donde existe una sociedad con una denominación social idéntica a la de otra, a quien se le puede solicitar su consentimiento, lo mismo no sucede en los casos de semejanza donde existen pluralidades de sociedades que comparten una o varias palabras que las asemeja entre sí, haciendo imposible solicitar el respectivo consentimiento. Además, no resulta coherente que una sociedad se adjudique como propio ciertas palabras y se espere que brinden su consentimiento para que otras sociedades puedan utilizar una palabra, las cuales deberían ser de libre uso por todas las sociedades que actúan en el mercado.

El considerando décimo primero de la Sentencia de Primera Instancia del presente expediente afirma que la reiterada jurisprudencia ha establecido que la legitimidad para adoptar una denominación completa o abreviada igual o semejante a la de otra sociedad preexistente se da en el caso de una empresa que sin haber adquirido personería jurídica hubiese estado operando en el mercado durante una considerable cantidad de tiempo en el cual se haya hecho notoriamente conocida por el público.

Tomando en consideración que la jurisprudencia es cambiante, mutable y dinámica, la cual está sujeta a la arbitrariedad del juez en la resolución de un caso concreto, no resulta adecuado que solo se considere un solo supuesto de legitimidad para adoptar una

denominación semejante cuando en la práctica pueden existir otros supuestos que ameritan una evaluación por parte del juez. Tomando en cuenta que la legislación societaria solo se limita a establecer la existencia de la excepción más no se pronuncia al respecto, se ha dejado a discrecionalidad del juez el análisis del concepto de legitimidad.

En opinión de Daniel Echaiz en la práctica “encontramos, cuando menos, dos supuestos fácilmente apreciables de legitimidad, atendiendo a lo anteriormente explicado: por un lado, los grupos de empresas y, por otro lado, la homonimia<sup>32</sup>”

El Tribunal Registral<sup>33</sup> se ha pronunciado respecto a la excepción contenida en el art. 9 de la LGS de la siguiente manera:

*“(…) sin embargo, consideramos que el Registro no es competente para analizar la legitimidad a que hace referencia la excepción contenida en el artículo 9, dado que no cuenta con todos los medios necesarios para determinar la posibilidad del uso de una denominación o razón social preexistente, facultad que en todo caso le corresponde al Juez quien evaluará las pruebas que en conjunto presente la sociedad o sociedades interesadas, debiendo tenerse en cuenta que la denominación o razón social es la que determina la identidad de la persona jurídica, en cuya virtud los terceros pueden identificarla, por lo que deberá analizarse el derecho de estos frente a la confusión o designación en el mercado”*

Como se puede observar, el Tribunal Registral sostiene que la autoridad competente para analizar el supuesto de excepción del art. 9 es el Poder Judicial, sin embargo, no hemos advertido tal análisis en ninguna de las sentencias del presente expediente.

Por otro lado, la Casación N° 1890-2001-LIMA, se ha pronunciado respecto al concepto de legitimidad de la siguiente manera:

*“Que, en consecuencia, si bien las instancia de mérito concluyen que existe semejanza entre la denominación social de la demandante con la de la recurrente, sin embargo ha efectuado una interpretación errónea del artículo noveno de la LGS, al hacer una interpretación restrictiva y asistemática, con relación a la legitimidad derivada de lo dispuesto en los artículos ochenta y dos inciso e) y ciento veintiocho de la decisión trescientos cuarenta y dos, así como*

---

<sup>32</sup> Echaiz Moreno Daniel, *Ob. Cit.*, 209

<sup>33</sup> Resolución N° 092-2005-SUNARP-TR-L, de fecha 08 de febrero del 2005.

también de lo dispuesto en el artículo ciento veintinueve inciso e) del decreto legislativo ochocientos veintitrés, normas que han sido inaplicadas en la recurrida” [Subrayado es nuestro]

De acuerdo a lo mencionado por la Casación antes citada, nuestro ordenamiento es un todo unitario y armónico, y toda interpretación de la norma se debe realizar en su contexto, esto quiere decir que debe buscar el sentido que debe tener con la finalidad de armonizar orgánica y lógicamente con el ordenamiento jurídico. En otras palabras, en este caso en particular la Corte Suprema optó por realizar una interpretación sistemática del artículo 9 apoyándose en criterios básicos del Derecho de Marcas, lo cual no quiere decir que asemejó o equiparó los conceptos de nombre comercial y denominación social.

Por otro lado, la Corte Suprema en el tercer considerando de la Casación estableció que el artículo 9 de la LGS debe interpretarse literalmente, es decir que el sentido de dicho artículo determina la ilicitud de la adopción de nombres que por su igualdad o semejanza con las otras sociedades pueden inducir al público a confusión.

Al respecto, se advierte que la Corte Suprema ha optado por la exclusividad del método de interpretación literal al emitir su decisión, dicho procedimiento de interpretación consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de reglas lingüísticas, es decir que dicho método trabaja con la gramática y el diccionario<sup>34</sup>.

Sin embargo, tomando en consideración que, de un análisis gramatical del artículo 9 de la LGS, no queda claro el sentido de dicho dispositivo normativo respecto a qué hace referencia la excepción de legitimidad para adoptar una denominación semejante a la de otra sociedad preexistente, considero que una interpretación literal aquí es insuficiente y no aporta a la definición del concepto de legitimidad.

En relación a ello, Marcial Rubio afirma lo siguiente:

*“El método literal es el primero a considerar necesariamente en el proceso de interpretación porque decodifica el contenido normativo que quiso comunicar quien dictó la norma. Sin embargo, el método literal suele actuar –implícita o explícitamente– ligado a otros métodos para dar verdadero sentido a las interpretaciones y, en muchos casos, es incapaz de dar una respuesta interpretativa adecuada<sup>35</sup>”*

---

<sup>34</sup> Rubio Correa Marcial, *El Sistema Jurídico: Introducción al derecho*, (Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), pp. 221.

<sup>35</sup> Rubio Correa Marcial, *Ob. Cit.*, 239

Aterrizando lo antes desarrollado, y realizando una interpretación sistemática por comparación con otras normas, específicamente del Derecho de Marcas, considero que la demandada tiene legitimidad para adoptar una denominación semejante a la de otra sociedad preexistente, encontrándose dentro del supuesto de excepción a la regla prevista por el artículo 9 de la LGS, por las siguientes razones:

En primer lugar, la palabra Renting es un término descriptivo toda vez que indica directamente la forma como se llevará a cabo la prestación de los servicios, es decir, a través de un contrato de renting.

Conforme a ello, se observa que la demandante eligió como denominación un término descriptivo, genérico y carente de fuerza diferenciadora, por lo que no considero que dicho interés sea merecedor de tutela ya que los términos descriptivos deben ser utilizables por todas las empresas que actúan en el mercado, de lo contrario se estaría afectando no solo a la demandada sino a la pluralidad de sociedades que incluyen dentro de su denominación social el término renting.

En segundo lugar, no se desprende de un análisis gramatical del artículo 9 de la LGS cuándo una sociedad se encuentra legitimado para adoptar una denominación semejante a otra, por ende, al ser un artículo que presenta problemas de comprensión sobre el sentido de lo que prescribe, se debe utilizar los métodos de interpretación jurídica, tales como la interpretación sistemática por comparación con otras normas.

Dicho método de interpretación busca esclarecer que quiere decir la norma atribuyéndole distintos principios y/o conceptos que están más desarrollados y claros en otras normas.

Al respecto, Bullard<sup>36</sup> sostiene lo siguiente:

*“El juez debe aplicar la ley. Pero hacerlo no es considerar sólo su texto, sino su espíritu. Es la aplicación lo que convierte a la ley, de ser un conjunto de palabras, a ser una realidad viviente. Por eso, olvidar que es la aplicación la que le da la vida a la ley es como olvidar que es la inteligencia lo que nos da humanidad”.*

En ese sentido, tomando en consideración que en el derecho societario no existe ninguna norma que regule términos descriptivos o genéricos, como es considerado el término Renting, resulta pertinente analizarlo tomando como referencia las normas del derecho de marcas.

---

<sup>36</sup> Bullard González Alfredo, *El análisis económico de las instituciones legales*, (Lima: Palestra Editores, 2006), pp. 65

En tercer lugar, de acuerdo al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, no es posible registrarse como marcas aquellos signos que consistan exclusivamente en un signo indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación.

La razón de prohibir el registro de signos descriptivos no es únicamente la falta de aptitud distintiva, sino que al ser estos elementos que brindan información sobre determinados productos o servicios, deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado. Así, si se otorgase el derecho a su uso exclusivo a favor de una determinada persona, se estaría privando a los competidores de la facultad de utilizar dichos términos, convirtiéndose en una ventaja injusta.

De esta manera, conforme al criterio seguido por la Casación N° 1890-2001-Lima considero que, si bien el concepto de términos descriptivos solo se ha regulado en el derecho de marcas, este debería ser adoptado en el derecho societario tomando en cuenta que las denominaciones sociales solo están compuestas por letras y palabras susceptibles de expresión en el lenguaje oral y escrito, y no por otros elementos gráficos que permitan diferenciarlos, por ende, resulta justo y proporcional que existan determinadas palabras y/o términos que no puedan ser consideradas como nombres propios y que generen derechos exclusivos a su titular.

En ese contexto, la legitimidad que hacer referencia el Art. 9 es aquella dada por una específica autorización de una sociedad a otra, así como aquella que es consentida u obligada por el sistema legal o justificada por la racionalidad de las cosas, en este caso en particular si una denominación es descriptiva y de uso común no resulta coherente y racional que exista un aprovechamiento ilegítimo por parte de una sociedad<sup>37</sup>.

#### **4.2. Determinar la aplicación de normas del Derecho de la Propiedad Intelectual a un caso de Derecho Societario**

A fin de proceder a responder la interrogante planteada en este punto, es importante mencionar que nuestra regulación ha optado por considerar al nombre comercial y a la denominación social como figuras autónomas, siendo estas reguladas de forma independiente, incluso dentro del mencionado artículo 9 se ha contemplado como parte de las prohibiciones para adoptar una denominación social que dichos nombres no sean

---

<sup>37</sup> Beaumont Callirgos Ricardo, *Comentarios a la nueva Ley general de sociedades: análisis artículo por artículo*, (Lima: Gaceta Jurídica, 2007) pp. 65

iguales a un signo protegido por el derecho de propiedad intelectual<sup>38</sup>. Por su parte, el artículo 190 de la Decisión 486 establece que los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Al respecto, Kresalja comenta lo siguiente:

*“Aunque la vía para la protección del nombre social y el trámite de su inscripción son distintos a los consignados para las marcas, no puede negarse que el nombre social en muchas veces se utiliza en la publicidad y en tal medida, en contraposición a aquellos que señalan que no forma parte de la “propiedad inmaterial” de la empresa, para otros constituye un elemento que forma parte del conjunto de valores intangibles de la sociedad. Por todo ello, puede afirmarse que no es sencillo diferenciar las funciones entre las denominaciones y los nombres comerciales, pues a pesar de su distinto origen que en el plano teórico pueden deslindarse, en la práctica cotidiana de los negocios resulta difícil su delimitación, siendo las más veces sus funciones por completo coincidentes, estando la protección jurídica de ambos ligada al funcionamiento del mercado”<sup>39</sup>*

En muchas ocasiones sucede que determinadas sociedades se constituyen bajo una determinada denominación social que resulta ser idéntico o similar a una notoriamente conocida en otro país, o también que se adopte denominaciones sociales que son idénticas o similares a marcas debidamente registradas y que resultan tener una gran notoriedad en el mercado. Esto sucede debido a que, en la práctica, cuando se registra una sociedad, el registrador no realiza una evaluación acerca de si el nombre adoptado afecta el derecho de una marca protegida, generando así un conflicto entre denominaciones sociales y una marca debido a la falta de mecanismos que regulen los derechos de los unos frente a los otros.

En ese contexto, en el año 2019 SUNARP e INDECOPI firmaron un Convenio de Cooperación Técnica que busca fomentar que nombres de sociedades que se registren no infrinjan derechos de propiedad intelectual de terceros, así como mejorar la eficiencia en el cumplimiento de los fines y objetivos de ambas instituciones.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Nuñez Velásquez Sofia, *Seis temas de interés jurídico: libro homenaje por los 25 años de “Rey & de los Rios – Abogados”* (Lima: Servicios Gráficos, 2008), pp. 78-79

<sup>39</sup> Kresalja Roselló Baldo, *El nombre comercial: existencia, protección y sobrevivencia en la realidad peruana*, (Lima: Palestra Editores, 2016), pp. 23

<sup>40</sup> Noticias Indecopi, “Mediante Convenio de Cooperación Técnica el Indecopi y la Sunarp fomentarán que nombres de sociedades que se registren no infrinjan derechos de propiedad intelectual de terceros” [https://indecopi.gob.pe/noticias/-/asset\\_publisher/E4hIS8IHZWs9/content/mediante-convenio-de-cooperacion-tecnica-el-indecopi-y-la-sunarp-fomentaran-que-nombres-de-sociedades-que-se-registren-no-infrinjan-derechos-de-propiedad-intelectual-de-terceros?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.indecopi.gob.pe%2Fnoticias%3Fp\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_E4hIS8IHZWs9%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-](https://indecopi.gob.pe/noticias/-/asset_publisher/E4hIS8IHZWs9/content/mediante-convenio-de-cooperacion-tecnica-el-indecopi-y-la-sunarp-fomentaran-que-nombres-de-sociedades-que-se-registren-no-infrinjan-derechos-de-propiedad-intelectual-de-terceros?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.indecopi.gob.pe%2Fnoticias%3Fp_id%3D101_INSTANCE_E4hIS8IHZWs9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-)

Si bien la colisión entre una marca y una denominación social no es materia del presente expediente, me permite ejemplificar que el derecho de propiedad intelectual y el derecho societario no siempre se encuentran aislados.

Ahora bien, como se ha venido desarrollando en el presente informe, desde mi punto de vista la naturaleza de la palabra renting es descriptiva de la actividad y, por ende, la demandada se encuentra legitimada para utilizarla como parte de su denominación social. Dicha posición se encuentra basada en el concepto de términos descriptivos regulado en el derecho de marcas, el cual no se encuentra regulado en el derecho societario, pero que debería interpretarse sistemáticamente a fin de que exista una coexistencia pacífica de ambas denominaciones sociales.

En primer lugar, el artículo 9 de la LGS contiene términos ambiguos que no han sido definidos en las normas societarios: denominación social semejante y legitimidad. Respecto al término semejante, el mencionado dispositivo legal no ha establecido cuando una denominación social es semejante a otra como si lo hizo respecto a la igualdad de denominaciones sociales. Es más, resulta aún más confuso dicho concepto ya que el artículo 16 del Reglamento del Registro de Sociedades (en adelante, “RRS”), que desarrolla el concepto de igualdad, indica que esta se produce de dos formas: 1) cuando hay total coincidencia entre una denominación o razón social con otra preexistente, cualquiera sea la forma societaria adoptada; y 2) en las variaciones de matices de escasa significación, tales como el uso de la mismas palabras con la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, o signos de puntuación, el uso de la mismas palabras en diferente orden, así como el singular y plural.

En otras palabras, el RRS amplía el concepto de igualdad para incluir el de semejanza, denominado por la doctrina como “muy semejante”, generando en la práctica una confusión de conceptos entre la igualdad (muy semejante) y semejanza.

Respecto al término de legitimidad, considero que este es un término general que revela que el legislador ha concedido al juez un ámbito de discrecionalidad<sup>41</sup>. Como bien se ha podido observar en distintos pronunciamientos de la Corte Suprema, se ha optado por interpretar literalmente dicho dispositivo legal, desde mi punto de vista esta interpretación no basta y no resulta suficiente para este caso en particular puesto que nos encontramos frente a una norma poco clara que carece de criterios objetivos.

---

[3%26p\\_p\\_col\\_count%3D1%26\\_101\\_INSTANCE\\_E4hIS8IHZWs9\\_cur%3D17%26\\_101\\_INSTANCE\\_E4hIS8IHZWs9\\_keywords%3D%26\\_101\\_INSTANCE\\_E4hIS8IHZWs9\\_advancedSearch%3Dfalse%26\\_101\\_INSTANCE\\_E4hIS8IHZWs9\\_delta%3D10%26p\\_r\\_p\\_564233524\\_resetCur%3Dfalse%26\\_101\\_INSTANCE\\_E4hIS8IHZWs9\\_andOperator%3Dtrue](#)

<sup>41</sup>Zusman T. Shoschana, *La interpretación de la ley: teoría y métodos*, (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2018), pp. 156.



Es así como el año pasado el Tribunal Registral emitió un precedente de observancia obligatoria<sup>42</sup>, apartándose de la postura establecida por la Resolución N° 092-2005-SUNARP-TR-L<sup>43</sup>, respecto a la legitimidad para adoptar denominación o razón social igual a la de sociedad preexistente. El mencionado precedente establece que la legitimidad queda acreditada con copia certificada del acta de junta general de la sociedad preexistente que autoriza su uso por otra sociedad. De esta manera, se evidencia que el artículo 9, específicamente el término legitimidad, requería ser interpretado de modo expreso y con carácter general para su debida aplicación ya que de una lectura literal y gramatical no resultaba suficiente.

En segundo lugar, la aplicación de una interpretación sistemática implicaría la utilización de métodos y conceptos que normalmente se utiliza en casos de propiedad intelectual para brindar una solución a un caso en particular, tomando en cuenta que existen casos de conflictos entre denominaciones sociales y un signo distintivo, como en la Casación 4764–2009-LIMA, donde se requiere que el juez realice un análisis una correcta evaluación del caso.

La interpretación sistemática no es ajena al derecho, por ejemplo, el artículo 37° del Decreto Supremo N° 001-97 - Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, establece lo siguiente:

*“Los depósitos de la compensación por tiempo de servicios, incluidos sus intereses, son intangibles e inembargables salvo por alimentos y hasta el 50%(...)”*

El precitado artículo no menciona que se entiende por “alimentos” y la legislación laboral tampoco define dicho concepto. Por ende, resulta adecuado recurrir al Código Civil que lo define del siguiente modo:

*“Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia (...)”*

Como se puede observar en este ejemplo, a través del método sistemático por comparación de normas, el artículo materia de interpretación es comparado con uno que permite aclarar su significado.

---

<sup>42</sup> Resolución N° 544-2019-SUNARP-TR-T, de fecha 07 de agosto del 2019.

<sup>43</sup> La mencionada Resolución, de fecha 18 de febrero del 2005, sentó el criterio que SUNARP no estaba habilitado para analizar la excepción contenida en el artículo 9 de la LGS, siendo competencia del Poder Judicial.

Del mismo modo, en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00298-11- 2013 se estableció lo siguiente:

*“(...) conforme con el criterio establecido por este Tribunal en la Resolución N° 06377-2-2006, considerando que la Ley de Tributación Municipal no contempla una definición de empresa constructora, para verificar si un transferente califica como tal, procede remitirse a la definición que contiene la Ley del Impuesto General a las Ventas”.*

Como se puede advertir del pronunciamiento del Tribunal Fiscal, se realizó una comparación de dos textos normativos (Ley de Tributación Municipal y Ley del Impuesto a la Renta) con el propósito de aclarar el significado del término empresa constructora.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede observar que resulta bastante común y acertado realizar interpretaciones sistemáticas de distintas normas para dar coherencia al sistema jurídico.

#### **4.3. Determinar si se ha producido una afectación al demandante derivado de la semejanza de las denominaciones sociales**

Si bien la demandante acreditó en su escrito de demanda, a través de diversos medios probatorios, la grave confusión generada por la semejanza entre ambas denominaciones sociales, el mismo no fue materia de análisis por partes de las distintas instancias.

Al respecto, la demandante presentó, tanto en la interposición de la demanda como extemporáneamente, documentos que acreditaban la grave confusión generada entre los clientes y el público en general por la similitud de ambas denominaciones sociales, entre los cuales se encontraban artículos de diarios, invitaciones, facturas, mails, entre otros, dirigidos a la demandada, pero entregados a la demandante por error.

Ahora bien, a fin de determinar si los medios probatorios presentados por la demandante acreditan una afectación que amerite la modificación de la denominación social de la demandada es necesario, en primer lugar, realizar un análisis de la afectación como requisito para ordenar la modificación de una denominación social.

El artículo 9 de LGS, al igual que en el caso del término legitimidad, es bastante escueto respecto al requisito de afectación derivado de la semejanza:

*“(…) En los demás casos previstos en los párrafos anteriores los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la denominación o razón social por el proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición”*

Al respecto, Ricardo Beaumont comenta lo siguiente:

*“Los problemas de denominaciones o razones sociales iguales o semejantes se plantean y suscitan solo en tanto y en cuanto tal confusión puede generar problemas tributarios, penales, mercantiles y civiles. En cuanto a los mercantiles queremos referirnos a problemas frente al consumir, competencia desleal y contratación (know how, franchising, auspicio y otros): en los civiles, también la situación de exigibilidad de ciertos contratos, v. gr. Arrendamiento, así como casos de inejecución de obligaciones y responsabilidad extracontractual. En este intervalo y sólo en la medida en que el nombre igual pudiese originar situaciones indeseables, habrá que demandar el cambio ante el juez del domicilio del infractor” [Subrayado es nuestro]*

Por otro lado, la Casación 737-2004-Chincha menciona lo siguiente:

*“Igualmente, esta errónea interpretación de la instancia de mérito no termina ahí, sino también equivocadamente exige más supuestos que el texto del artículo en mención no establece, tales como la inscripción en el mismo Registro Público, que las sociedades en controversia tengan el mismo objeto o forma social y que se acredite que dicha confusión haya suscitado la existencia de problemas penales, tributarios, mercantiles o civiles; por tal motivo, este extremo del recurso merece ser amparado.*

En ese sentido, conforme al criterio seguido por la Casación antes citada, la confusión entre las denominaciones sociales no necesariamente debe generar problemas legales (penales, tributarios, mercantiles o civiles) a la sociedad afectada por la semejanza, ya que esto no es considerado un requisito para amparar el derecho de la demandada.

Como se puede observar, nuevamente se le ha otorgado discrecionalidad al juez para que pueda determinar en cada caso concreto cuándo existe un conflicto entre denominaciones sociales que amerite la modificación de una de ellas. En este caso en particular, el juez consideró, después de un análisis de los medios probatorios, que la semejanza entre Renting S.A.C y Renting Perú S.A.C. generaba una notable confusión dentro del mercado y afectación a la demandante.

Desde mi punto de vista, al no existir criterios objetivos que determinen en qué casos debe ampararse una demanda de modificación de denominación social, el juez debe valorar los medios probatorios y seleccionar aquellos intereses merecedores de tutela, como aquellos casos en donde la similitud haya generado problemas legales y/o reputacionales ya que de lo contrario se podría llegar al absurdo de modificar denominaciones sociales por causas no trascendentes, afectando así el derecho a la identidad de las sociedades.

Considerando lo antes mencionado, es importante destacar que la denominación social de una sociedad se desenvuelve en un régimen económico que promueve la actividad empresarial y, por ende, se encuentra amparada por la Constitución. El artículo 58 de la Constitución establece a la libre iniciativa privada como un derecho constitucional de toda persona de realizar las actividades económicas necesarias para alcanzar sus fines, sin que éstas puedan ser obstaculizadas, siempre que se actúe dentro del marco que establece la ley.

Respecto al derecho a la identidad, el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú garantiza el derecho a la identidad de toda persona, dicho dispositivo legal no hace distinción a persona natural o jurídica, por lo que se puede deducir que la Constitución protege tanto la identidad de la persona jurídica como de la persona natural<sup>44</sup>.

El Tribunal Constitucional en el expediente N° 4972-2006-PA/TC (Corporación Meier S.A.C.) reconoce los derechos fundamentales de las personas jurídicas:

*“Siendo constitucionalmente legítimo el reconocimiento de derechos fundamentales sobre las personas jurídicas, conviene puntualizar que tal consideración tampoco significa ni debe interpretarse como que todos los atributos, facultades y libertades reconocidas sobre la persona natural sean los mismos que corresponden a la persona jurídica. En dicho nivel resulta evidente que los derechos objeto de invocación solo pueden ser aquellos compatibles con la naturaleza o características de cada organización de individuos, incidencia que, por de pronto, impone en el juez constitucional el rol de meritudo de cada caso, según las características o particularidades que le acompañan”*

Por consiguiente, a partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, no cabe duda que al igual que las personas naturales las personas jurídicas también tienen derechos fundamentales que deberán ser protegidos por el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentra el derecho a la identidad.

---

<sup>44</sup> Tabra Ochoa Edison Paul, *Ley General de Sociedades: estudios y comentarios a veinte años de su vigencia*, (Lima: Gaceta Jurídica, 2018), pp. 82

Un proceso de modificación de denominación social si no es analizado y evaluado correctamente por los jueces podría llegar a afectar el derecho a la identidad de una de las partes del proceso, tomando en cuenta que la identidad de la persona jurídica permite identificarlo e individualizarlo en el mercado como sujeto de derechos y obligaciones y, en virtud a ello, es un elemento fundamental para el desarrollo de su actividad empresarial.

Asimismo, una sentencia que no valore correctamente los medios probatorios y que analice vagamente el art. 9 de la LGS, podría tener como consecuencia generar externalidades a la parte perdedora que efectuará la modificación de su denominación social tales como gastos notariales, gastos registrales, contables, tributarios, procesales, contractuales y demás aspectos en los que el nombre de una empresa toma relevancia, así como una grave afectación a la reputación corporativa, la cual forma parte de su identidad y ha sido forjada en el tiempo de acuerdo a la experiencia adquirida en el mercado.

En el presente expediente resulta pertinente analizar el concepto de equidad, el cual implicar ver los efectos que el presente caso tiene, en otros distintos a las partes y analizar qué pasaría si el mismo se repitiera, esto es la transcendencia social del caso<sup>45</sup>.

En mi opinión, una sentencia que ordena la modificación de una denominación social solo debe ser amparada cuando exista una afectación relevante, por ejemplo, que derivado de la similitud de ambas denominaciones sociales se haya producido problemas de índole legal y/o reputacional, de lo contrario se estaría vulnerando la esfera jurídica y el derecho a la identidad de una empresa por causas no trascendentales.

Por esta razón, aplaudo que la sexta disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1332 haya eliminado el uso del criterio semejanza de la redacción del art. 9 de la LGS y solo prohíba la igualdad ya que considero que resulta muy subjetiva la calificación de semejante y le otorgaba discrecionalidad a un juez que no es competente para evaluar denominaciones sociales.

#### **4.4. Determinar si se incurrió en un vicio de motivación en el proceso civil**

A fin de proceder a responder la presente interrogante, es importante recordar que el proceso civil encuentra su fundamento en diversos principios regulados en el Título Preliminar del Código Procesal Civil, pudiendo encontrar, dentro de los mismos, a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocida en el Artículo I del Título Preliminar de dicho cuerpo normativo y el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Bullard González Alfredo, *Ob. Cit.*, 66

<sup>46</sup> Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia  
(...)

En relación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva el Tribunal Constitucional menciona que “(...) cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos, ella deba ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas”<sup>47</sup>. Es así, como el Tribunal hace referencia que ambos derechos se encuentran vinculados entre sí de forma tal que el derecho al debido proceso es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

En palabras de Marcial Rubio el debido proceso “es el cumplimiento de todas las garantías y todas las normas de orden público que debían aplicarse en el caso de que se trate. Es llevar el proceso judicial de acuerdo a Derecho”<sup>48</sup>.

En relación a los alcances del derecho al debido proceso, el Tribunal Constitucional definió alguno de ellos:

*“Por ello, todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional (sea ordinario, constitucional, electoral, militar y, por extensión, los árbitros) debe respetar, mínimamente, las garantías que componen los derechos a la tutela jurisdiccional “efectiva” y al debido proceso, entre las que destacan los derechos al libre acceso a la jurisdicción, de defensa, a la prueba, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la obtención de una resolución fundada en Derecho, a la pluralidad de instancias, al plazo razonable del proceso, a un juez competente, independiente e imparcial, a la ejecución de resoluciones judiciales, entre otros derechos fundamentales”<sup>49</sup>.*

En ese sentido, el derecho al debido proceso supone que el juez tiene el deber de motivar las resoluciones judiciales y actuar de manera independiente e imparcial, otorgando un adecuado derecho de defensa a todos los interesados. En concordancia a ello, el Tribunal Constitucional se pronuncia al respecto de la siguiente manera:

*“En efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una*

---

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

<sup>47</sup> Sentencia recaída en el Exp. N° 004-2006--PI/TC del 29 de marzo de 2006.

<sup>48</sup> Rubio Correa Marcial, *Ob. Cit.*, 150.

<sup>49</sup> Exp. N° 0004-2006-PI/T

*controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver<sup>50</sup>.”*

El derecho a la motivación de las decisiones judiciales busca que los jueces, al resolver las causas, expresen los fundamentos o justificaciones objetivas que lo han llevado a tomar una determinada decisión, las cuales deben provenir, necesariamente, no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso sino que se deben desprender, asimismo, de los propios hechos acreditados en el proceso en cuestión.

Ahora bien, a fin de determinar si la decisión de la Corte Suprema incurría en una falta de motivación, es preciso identificar los vicios de motivación que existen. De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional en el Expediente 0728-2008-PHC/TC (Caso Giuliana Llamoja), el derecho a la motivación cuenta con seis categorías:

A. Inexistencia de motivación

El Tribunal Constitucional menciona que una motivación es inexistente cuando el juez no da cuenta de las razones que sustentan su decisión o cuando los mismos no responden a las alegaciones de las partes en el proceso, violando así el derecho a una decisión debidamente motivada.

B. Motivación aparente

Una motivación es aparente cuando solo intenta dar cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases que cuentan con solidez fáctica o jurídica.

C. Falta de motivación interna del razonamiento

Esta categoría de motivación se presenta de dos formas; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que se presenta como un discurso es absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo lógico, las razones en las que se apoya la decisión.

D. Deficiencia en la motivación externa

---

<sup>50</sup> Exp. N° 0896-2009-PHC/TC

Esta categoría de motivación se presenta generalmente en los casos difíciles, en donde existe problemas de pruebas o de interpretación normativa, específicamente cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

E. Motivación insuficiente

Se produce cuando el juez cumple con motivar sus decisiones, pero la ausencia de argumentos o la insuficiencia de los mismos resulta manifiesta a la luz de lo que se está decidiendo.

F. Motivación sustancialmente incongruente

Los jueces tienen la obligación de resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vienen planteados. En ese sentido, la incongruencia se puede dar de dos formas: activa y omisiva. La primera se refiere a cualquier desviación que supongan modificación o alteración del debate procesal. La omisiva hace referencia a dejar sin respuesta las pretensiones de las partes o desviar la decisión de la línea de debate judicial generando indefensión.

Aterrizando lo antes desarrollado al expediente materia del presente informe, considero que la Casación adoleció de vicio de motivación aparente ya que se verifica que la Corte Suprema solo se ciñó a analizar la existencia de semejanza entre ambas denominaciones sociales. Asimismo, no se realizó un análisis de la legitimidad como excepción para adoptar una denominación semejante, a pesar de haber sido el argumento de defensa de la demandada y sobre el cual se pronunció ampliamente la resolución impugnada.

Si bien, se aprecia que la Casación ha realizado un análisis de la semejanza entre ambas denominaciones sociales, este punto fue expresamente aceptado por la demandada y sobre el cual no se pronunció la sentencia recurrida puesto que analizó si la demandada contaba con legitimidad para adoptar una denominación semejante.

También se puede verificar que la Casación no realizó un análisis de la naturaleza del término Renting, a pesar que este fue el argumento principal de la demandada y que fue amparado por la sentencia recurrida, la cual motivó la presentación del recurso de casación por parte de la demandante.

## 5. **POSICIÓN SOBRE LAS RESOLUCIONES**

### ***Posición sobre el modo en que fue resuelto***

Conforme a lo que he indicado en el presente informe, existieron tres (3) resoluciones que resolvieron la controversia.



En tal sentido, a continuación, mi posición respecto de cada una de ellas:

#### **1. Sentencia de Primera Instancia**

##### ***Resolución N° 16 - Sentencia emitida por el Segundo Juzgado Civil Sub Especializado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima***

De la revisión de la Sentencia de Primera Instancia – Resolución N° 16 – y de los argumentos que lo sustentan, no estoy de acuerdo con que se haya declarado FUNDADA la demanda interpuesta, puesto que considero que el juzgado a cargo se ha limitado a efectuar un análisis literal del artículo 09 de la LGS, delimitando todos los rangos de su aplicación, sin interpretar sistemáticamente dicho cuerpo normativo con la Ley de Marcas y propiedad industrial.

Ahora bien, es menester precisar que en esta resolución no solo se hizo un análisis de igualdad, sino que también se analizó la semejanza, basándose para el primero en el Reglamento de Registro de Sociedades, y para el segundo efectuando una comparación semántica y fonética de ambas denominaciones sociales; para finalmente determinar que existe similitud entre ambas sociedades. Sin embargo, la demandada nunca negó la similitud existente entre ambas denominaciones sociales; por el contrario, lo aceptó indicando que se encuentra legitimidad para utilizar dicha denominación al ser esta descriptiva de la actividad.

En relación a la legitimidad, la Sentencia señala que opera cuando hay una sociedad preexistente que sin haber adquirido personería jurídica hubiese estado en el mercado durante una considerable cantidad de tiempo y se vuelva notoriamente conocida por el público. Al respecto, y como he señalado en el presente informe, no puede limitarse el concepto de legitimidad a un solo supuesto ya que en la práctica pueden existir más supuestos los cuales deberían ser evaluados en cada caso concreto por el juez. Asimismo, en ninguna parte de la sentencia se realizó una evaluación de la naturaleza descriptiva del término Renting, solo se limitó a expresar que dicho concepto está referido al derecho de marca, lo cual no es correcto ya que pueden existir términos descriptivos en denominaciones sociales.

En relación a los medios probatorios, la Sentencia mencionó que se acreditó, a través de una evaluación de las facturas, cartas de bancos, contratos financieros, que la similitud entre ambas denominaciones sociales genera confusión dentro del mercado, máxime si se tiene en cuenta que ambas se dedican al mismo rubro. Respecto a ello, considero que la norma no establece parámetros que determinen en qué casos se considera que una sociedad es afectada por la similitud de las denominaciones; sin

embargo, se entiende que el interés que se busca proteger a través de proceso civil debe ser un interés merecedor de tutela, esto es relevante, lo cual no se aprecia a través de los medios probatorios puestos que estos solo demuestran un error en el envío de correspondencia, no imputable a la demandada. Cabe mencionar que ninguna factura tiene como destinatario a Renting S.A.C., tiene como que destinatario a Renting Perú S.A.C.

Asimismo, en el décimo considerando la Corte Superior hace mención que se aprecia una notable confusión dentro del mercado entre ambas empresas, al respecto es importante mencionar que el riesgo a confusión que pudiera provocar la similitud entre ambas denominaciones sociales no compete al derecho de sociedades ya que la represión de los riesgos de confusión en el mercado es competencia de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal o por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI.

## **2. Sentencia de vista**

### ***Resolución N° 20 – Sentencia de la Primera Sala Civil Superior Sub Especializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima***

De la revisión de la Resolución N° 20 que por voto mayoritario REVOCA la Sentencia de primera instancia y la REFOMRULA a INFUNDADA, debo indicar que me encuentro conforme y de acuerdo con este fallo, por los fundamentos que pasare a exponer a continuación:

En primer lugar, es menester precisar que la Resolución, en su fundamento cuarto, hace distinción entre el nombre comercial y la denominación social, señalando que esta última no establece parámetros respecto a aquellas, por ende, estas últimas pueden ser integradas por fonemas de tipo descriptivo o distintivo sobre las cuales no pueden exigir exclusividad. Coincido totalmente con este extremo de la Resolución ya que, efectivamente, no existen límites para adoptar denominaciones sociales, sin embargo, considero que no debe otorgarse exclusividad de términos genéricos de tipo descriptivas a una sola sociedad ya que las mismas deberían estar a disposición de otras sociedades.

En segundo lugar, la Resolución señala que el termino RENTING es descriptivo ya que define el contrato de alquiler a largo plazo de un vehículo. Concuero totalmente con dicho fundamente de la Resolución ya que, como ya lo había mencionado, la

misma indica directamente la forma como se llevará a cabo la prestación de los servicios, esto es, a través de la suscripción de un contrato de renting.

Por último, coincido con la Resolución en relación a que el término RENTING no es reivindicable ya que el mismo es genérico y debería estar a disposición de todas las sociedades que deseen adoptarlo como parte de su denominación social.

### **3. Sentencia – CAS N° 1085-2010 expedido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República**

Finalmente, y luego de revisar y analizar los fundamentos emitidos por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, no estoy de acuerdo con lo resuelto por la Corte pues en mi opinión corresponde que se haya declarado infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa accionante y en consecuencia no casar la Sentencia de Vista (Resolución N° 20) de fecha 28 de enero de 2010 expedida por la Primera Sala Civil Sub Especializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en donde deciden CONFIRMAR la Sentencia de Primera, contenida en la Resolución N° 16, expedido por el Segundo Juzgado Civil Sub Especializado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la demanda.

Asimismo, es preciso señalar que no estoy de acuerdo que la Corte Suprema haya llegado a la conclusión de que el Primera Sala Civil Superior Sub Especializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima ha incurrido en una interpretación errónea de lo dispuesto el artículo 09 de la LGS, ya que lo que la Sala ha intentado hacer es interpretar sistemáticamente una norma genérica y oscura que requiere una labor interpretativa más ardua, al igual que lo hizo la Casación N° 1890-2001-LIMA.

En ese sentido, la Corte Suprema agrega que en dicha instancia también incurrió en error al procurar exigir mayores requisitos que la norma prevé, cuando el acotado artículo debe interpretarse de forma literal, es decir, cuando se aborda la licitud ante la igualdad o semejanza con otras sociedades e inducir al público a confusión. Al respecto, resulta pertinente mencionar que nos encontramos frente a un artículo que requiere ser interpretado ya que cuenta con término muy genéricos que imposibilita su interpretación literal. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que rara vez el método literal resulta suficiente para interpretar una norma jurídica, sino

que resulta apropiado utilizar y combinar varios métodos de interpretación como pueden ser el axiológico, el sistemático, el histórico, etc<sup>51</sup>.

Por último, la Casación no ha analizado la legitimidad como supuesto de excepción para adoptar una denominación semejante, así como no se ha pronunciado respecto de la naturaleza del término Renting, solo se ha limitado a indicar que entre ambas denominaciones sociales existe similitud, a pesar que eran los principales fundamentos de la parte demandante y la principal discusión en las diferentes instancias.

## 6. ANEXOS

- ANEXO 1:** Demanda de modificación de denominación social interpuesta por RENTING S.A.C.
- ANEXO 2:** Contestación de demanda por el RENTING PERU S.A.C
- ANEXO 3:** Sentencia de Primera Instancia (Resolución N° 16 - Sentencia emitida por el Segundo Juzgado Civil Sub- Especializado en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima)
- ANEXO 4:** Recurso de apelación interpuesto por RENTING PERU S.A.C
- ANEXO 5:** Sentencia de Vista (Resolución N° 20 – Sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima)
- ANEXO 6:** Escrito de interposición de recurso extraordinario de casación por RENTING S.A.C.
- ANEXO 7:** Sentencia – CAS N° 1085-2010 de fecha 10 de diciembre de 2010 expedido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

## 7. BIBLIOGRAFIA

---

<sup>51</sup> Linares San Román Juan José, *La causal de indebida aplicación, errónea interpretación o falta de aplicación de la ley en la casación penal*, Derecho y Cambio Social, Consultada en <https://www.derechocambiosocial.com/revista013/casacion%20penal.htm#:~:text=El%20autor%20Jorge%20Carri%C3%B3n%20Lugo,de%20violarla%E2%80%9D%5B9%5D>. (29 de agosto del 2020)

- 7.1. Barreda Zegarra, José. 2003. Algunas consideraciones sobre las denominaciones sociales, los nombres comerciales y las marcas. En *Tratado de Derecho Mercantil: Tomo I Derecho Societario*. Lima: Gaceta Jurídica.
- 7.2. Elías Laroza, Enrique. 1999. *Derecho societario peruano: La Ley General de Sociedades del Perú Tomo I*. Lima: Gaceta Jurídica.
- 7.3. De los Rios Woolls, Gustavo. 2008. *Seis temas de interés jurídico: libro homenaje por los 25 años de "Rey & de los Rios – Abogados*. Sofía Núñez Velasquez. Lima: Servicios Gráficos.
- 7.4. Beaumont Gallirgos, Ricardo. 2006. *Comentarios a la Ley General de Sociedades*. Lima: Gaceta Jurídica.
- 7.5. Tabra Ochoa, Edison Paul. Reflexiones societarias y registrales sobre el nombre social: denominación social y razón social. En *Ley general de sociedades: estudios y comentarios a veinte años de su vigencia*. Lima: Gaceta Jurídica.
- 7.6. Echaiz Moreno, Daniel. 2005. *Propuestas para una reforma de la legislación societaria en el Perú, Parte 1*. Bogotá: Universitas.
- 7.7. Pero Mayandia, Mariano. 2017. *Modificaciones a la Ley General de Sociedades en materia de Denominación Social o Razón Social, Objeto Social, y Poderes y Atribuciones del Gerente General mediante Decreto Legislativo N° 1332 que facilita la constitución de Empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial*. En *Derecho y Sociedad* N° 49. Lima: Asociación Civil Derecho & Sociedad.
- 7.8. Miranda Serrano Luis Maria. 1997. *Denominación Social y Nombre Comercial*. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales.
- 7.9. Hundskopf Exebio, Oswaldo. 2009. *Manual de Derecho Societario*. Lima: Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L.
- 7.10. Rubio, Marcial y Arce, Elmer. 2019. *Teoría esencial del ordenamiento jurídico peruano*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
- 7.11. Bullard González, Alfredo. 2006. *Derecho y Economía: El análisis económico de las instituciones legales*. Lima: Palestra Editores.

- 7.12. Murillo Chávez, Javier André. Usando la camiseta del INDECOPI en el Poder Judicial. En *Gaceta Judicial de Cuzco*.
- 7.13. Noguero Eliseo, Sierra. 2009. *Curso de Derecho Mercantil (Grado de Relaciones Laborales)*. 4ta Edición. Barcelona: Editorial Universitat Autònoma de Barcelona.
- 7.14. Bravo Melgar, Sidney Alex. 2010. *Contratos modernos: contratos atípicos e innominados*. Perú: Ediciones Legales.
- 7.15. Farina, Juan M. 2005. *Contratos Comerciales Modernos: Modalidades de contratación empresarial*. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Astrea.
- 7.16. Shoschana Zusman T. 2018. *La interpretación de la ley. Teoría y métodos*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
- 7.17. Salas Sánchez, Julio. 2017. *Sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
- 7.18. Rubio Correa, Marcial. 2009. *El sistema jurídico. Introducción al Derecho*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

**DATOS DEL BACHILLER**

Nombres y Apellidos : SOL ANGELA GUTIÉRREZ ASTOCONDOR  
Código de alumno : 11100557  
Correo electrónico : [11100557@ue.edu.pe](mailto:11100557@ue.edu.pe)  
[Sol\\_angela1994@hotmail.com](mailto:Sol_angela1994@hotmail.com)

**DATOS DEL EXPEDIENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

Materias : Impugnación de Resolución Administrativa  
Procedencia : Corte Suprema de Justicia de la Republica  
Código Esan : 2016 - 120  
Demandante : DEMANDANTE S.A.C  
Demandados : INDECOPI  
VELGEI S.A. EN LIQUIDACIÓN

**1. ANTECEDENTES**

1. Por Resolución N° 0293-2001-INDECOPI-PUCP del 16 de enero de 2001 se precisó que los créditos que mantiene Demandante frente a Velgei asciende a S/ 198 680,00 por concepto de capital y S/. 225 756,41 por concepto de intereses, correspondiendo a dichos créditos el primer orden de preferencia.
2. El 8 de marzo de 2004, Demandante invocó tardíamente el reconocimiento de nuevos créditos ascendentes a S/. 193 543.66 por concepto de capital, S/. 45 831.05 por concepto de intereses, para lo cual ha presentado las Liquidaciones para Cobranza correspondientes a los meses de febrero a diciembre de 2000, enero a diciembre de 2001, enero a diciembre de 2002 y enero a octubre de 2003. Asimismo, la solicitante informó que los créditos ascendentes a S/. 124 699,16 por concepto de capital y S/. 29 237,16 por concepto de intereses, han sido determinados sobre la remuneración máxima asegurable del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, toda vez que en su historial previsional no cuenta con información sobre la remuneración real de los afiliados.
3. Mediante Resolución N° 0123-2005/CCO-INDECOPI del 7 de enero de 2005, la Comisión declaró infundada la solicitud de reconocimiento de créditos presentada por Demandante en el extremo que invocó créditos ascendentes a S/. 124 699,00 por capital y S/. 29 237,16 por intereses frente a Velgei, derivados de aportes previsionales impagos correspondientes a trabajadores de dicha empresa, toda vez que la cuantía de los mismos fue calculada sobre la base de la remuneración máxima asegurable de los trabajadores.
4. El 25 de enero de 2005, Demandante interpuso recurso de apelación contra la resolución antes mencionada alegando que los créditos invocados se encuentran contenidos en liquidaciones para cobranza que cuentan con mérito ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto en el T.U.O de la Ley del Sistema Privado de Pensiones y que los artículos 154° y 155° de la Resolución N° 080-98-EF/SAFP obligan a las AFP's a determinar la remuneración asegurable máxima, con lo cual la Comisión debió proceder al reconocimiento de los mencionados créditos ante la presentación de las liquidaciones de cobranza.
5. Asimismo, señaló que el hecho que la Comisión no reconozca los créditos invocados solo porque la deudora no entregó los documentos que habrán permitido la elaboración de una nueva liquidación, implicaría que el reconocimiento de los créditos previsionales se encuentra supeditados a la voluntad del empleador, dejando a su arbitrio tal posibilidad.

## **2. HECHOS RELEVANTES**



***Relación de los hechos sobre los que versa la controversia de la que trata el expediente***

**1. Demanda**

1.1. Que, la empresa AFP Unión Vida (en adelante, la “**Demandante**”) interpuso la demanda sobre Impugnación de Resolución Administrativa en contra del INDECOPI y Velgei S.A. en liquidación (en adelante, los “**Demandados**”)

Las pretensiones planteadas por la Demandante fueron las siguientes:

- a) Primera Pretensión principal: Solicita se declara la Nulidad de la Resolución N° 0470-2005/TDC-INDECOPI, de fecha 25 de abril de 2005, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, que confirmó la Resolución N° 0123-2005/CCO-INDECOPI del 07 de enero de 2005.
- b) Pretensión Accesorio: Se proceda con el reconocimiento de créditos previsionales por concepto de capital e intereses generados hasta la fecha del acuerdo de Disolución y Liquidación de la empresa, conforme a lo establecido en la Resolución N° 0882-2004/TDC-INDECOPI del 06 de diciembre de 2004.

1.2. Los fundamentos de hecho que la Demandante presentó fueron los siguientes:

- a) De la Primera Pretensión Principal:
  - La Demandante señala que mediante Resolución N° 2185-1999/CRP-INDECOPI del 13 de julio de 1999 se declaró la insolvencia de la empresa demandada, asimismo por Resolución N° 1782-2001/CRP-INDECOPI-PUCP, la Comisión de Reestructuración del INDECOPI declaró la Disolución y Liquidación de Velgei S.A., y mediante Resolución N° 293-2001/CRP-INDECOPI-PUCP de fecha 16 de enero de 2001, se reconocieron los créditos que mantiene Demandante frente a Velgei ascendentes a S/. 198 680.00 por concepto de capital y S/. 228 756.41 por concepto de intereses.
  - Asimismo, con fecha 08 de marzo de 2004 solicitaron el reconocimiento de créditos de origen previsional frente a la empresa deudora, ascendentes a S/.193 543.66 por concepto de capital y S/. 45 831.05 por concepto de interés.

- No obstante, mediante Resolución N° 0123-2005/CCO-INDECOPI, la Comisión de Procedimientos Concursales declaró infundada en parte la solicitud de reconocimiento de créditos de origen previsional en razón de que parte de los créditos invocados fueron calculados sobre la base de remuneración asegurable máxima del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, contra la cual se interpuso recurso de apelación, siendo confirmada por la resolución materia de impugnación.
- Refiere que el Tribunal del INDECOPI no ha considerado que en caso el empleador no declare la remuneración y por ende no efectúe la retención correspondiente, las AFP están facultadas para la calcular la retención en base a la remuneración máxima asegurable, esto con el objeto de no dejar desprotegido al trabajador por un actuar negligente o doloso del propio empleador.
- En ese sentido, lo señalado en el párrafo anterior queda debidamente refiere que el no reconocimiento de los créditos previsionales conllevaría a un perjuicio irreparable para los trabajadores, toda vez que tales aportes se verían desprotegidos ante el incumplimiento de las disposiciones legales que las amparan.
- Por último, señala que el Tribunal de INDECOPI ha dejado de lado las normas que regulan la Remuneración Máxima Asegurable, aduciendo que atentan contra los intereses de la relación entre los acreedores en el Sistema Concursal, tomando como referencia principios generales del Sistema Concursal que no precisa, y que dicho análisis atenta contra el principio de legalidad, dado que los órganos de la administración están en la obligación de actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho.

b) De la Pretensión Accesorio:

- Se proceda con el reconocimiento de créditos previsionales por concepto de capital e intereses generados hasta la fecha del acuerdo de Disolución y Liquidación de la empresa, conforme a lo establecido en la normativa<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> “Artículo 42 Ley General del Sistema Concursal.- Orden de preferencia.-  
En los procedimientos de disolución y liquidación, el orden de preferencia en el pago de los créditos es el siguiente:

1.3. Los fundamentos de derecho que la Demandante presentó fueron los siguientes:

- El artículo 24° de la Constitución
- Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 856 y el artículo 42° de la Ley General del Sistema Concursal
- Artículo 25° de la Ley N° 27584

1.4. La vía procedimental en la que se solicitó que se tramitará la demanda es la vía Abreviada ante la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo.

1.5. Los medios probatorios que la Demandante ofreció fueron los siguientes documentos

- (i) Solicitud de reconocimiento de créditos en el procedimiento concursal ordinario de la empresa Velgwei S.A. de fecha 08 de marzo de 2004
- (ii) Resolución N° 0123-2005/CCO-INDECOPI de fecha 07 de enero de 2005, mediante el cual la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI declara infundada en parte la solicitud de reconocimiento de créditos previsionales a favor de Unión Vida

---

**Primero:** Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse. Los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones incluyen expresamente los conceptos a que se refiere el Artículo 30 del Decreto Ley N° 25897, con excepción de aquellos establecidos en el literal c) de dicho artículo;

**Segundo:** Los créditos alimentarios, hasta la suma de una (1) Unidad Impositiva Tributaria mensual;

**Tercero:** Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya sido constituida o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación a que se refiere el Artículo 32. Las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, deberá estar inscrita en el registro antes de dicha fecha, para ser oponibles a la masa de acreedores. Estos créditos mantienen el presente orden de preferencia aún cuando los bienes que los garantizan sean vendidos o adjudicados para cancelar créditos de órdenes anteriores, pero sólo hasta el monto de realización o adjudicación del bien que garantizaba los créditos;

**Cuarto:** Los créditos de origen tributario del Estado, incluidos los del Seguro Social de Salud - ESSALUD, sean tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos; y

**Quinto:** Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; y la parte de los créditos tributarios que, conforme al literal d) del Artículo 48.3, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos

Artículo 25 Ley N° 27584.- Proceso Abreviado.-

Se tramitan como proceso abreviado, conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil, las pretensiones no previstas en el Artículo 24 de la presente Ley.

En este proceso el dictamen fiscal se emitirá en el plazo de 25 días de remitido el expediente. Emitido el dictamen se expedirá sentencia en el plazo de veinticinco días.

- (iii) Recurso de Apelación de fecha 25 de enero de 2005 interpuesta por la Resolución mencionada.
- (iv) Resolución N° 0470-2005/TDC-INDECOPI de fecha 25 de abril de 2005, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI.
- (v) Anexos diversos, los cuales son:
  - Copia del documento de identidad del Sr. Jean Paul Brousset Vásquez.
  - Copia del registro único de contribuyentes de Demandante
  - Copia legalizada del Testimonio mediante el cual se le otorgan poderes de representación al Sr. Jean Paul Brousset Vásquez.
  - Copia de la solicitud de reconocimiento de créditos en el procedimiento ordinario concursal señalado
  - Copia de las Resoluciones actuadas en la vía administrativa
  - Copia del recurso de apelación.

## **2. Contestación de Demanda**

La entidad demandada contestó la misma con fecha 30 de septiembre de 2005, solicitando que sea declarada infundada, en base a los siguientes fundamentos de hecho:

- a) Señala como argumentos que las liquidaciones para cobranza emitidas por las AFP sobre la base de la Remuneración Asegurable Máxima sirven por sí mismas para el pago de los créditos en ellas consignados en un proceso de cobro de aportes previsionales, empero no pueden servir como sustento para el reconocimiento de créditos ante la autoridad concursal, pues la misma se sustenta en montos presuntos, e irreales, lo cual representaría una afectación directa a los intereses del deudor y de los demás acreedores que sí tienen créditos reconocidos sobre base real, entre los que se encuentran los trabajadores.
- b) Señala que la resolución impugnada se encuentra debidamente sustentada en la legislación concursal aplicable al caso, por lo que no se ha incurrido en causal de nulidad que pueda invalidarla.

- c) Por otro lado, se declara rebelde a AGV Asociados S.A., en representación de Velglei S.A. en Liquidación.

### **3. Saneamiento Procesal**

No habiéndose deducido excepciones ni defensas previas, verificando que las partes cumplen con las condiciones de la acción y los presupuestos procesales, corresponde emitir el saneamiento procesal.

### **4. Fijación de Puntos Controvertidos**

Mediante la actuación procesal de fecha 13 de enero del 2009 se fijan los siguientes puntos controvertidos:

- Determinar si se configura la nulidad de la Resolución N° 0470-2005/TDC-INDECOPI, de fecha 25 de abril de 2005, que confirmó la Resolución N° 0123-2005/CCO-INDECOPI de fecha 07 de enero de 2005.

Asimismo, mediante la referida resolución se admiten los medios probatorios conforme a la licitud, la pertinencia y la utilidad.<sup>53</sup>

### **5. Sentencia de Primera Instancia**

#### ***Resolución N° 10 - Sentencia emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima***

5.1. Mediante Resolución N° 10 de fecha 28 de noviembre de 2006, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, falló declarar: INFUNDADA la demanda interpuesta, por las siguientes principales razones:

- a) Que, si bien la Resolución N° 080-98-SAFP, en sus artículos 154 y 155 regula el procedimiento de cobranza de aportes previsionales no pagados por el empleador, estableciéndose que las AFP tiene la posibilidad de liquidar el monto de la obligación del empleador tomando como base de cálculo la Remuneración Máxima Asegurable para efectos del pago de primas del Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio.
- b) Sin embargo, si bien lo mencionado se efectúa sobre base presunta y no real, cabe mencionar que ello no sería aplicable a un procedimiento concursal en

---

<sup>53</sup> Principalmente las Resoluciones ofrecidas por las partes y que son materia de impugnación en el presente proceso.

los que se debe determinar la composición real de la masa de acreedores, pues al reconocerse un crédito cuyo monto fue liquidado sobre una base presunta se estaría reconociendo un crédito probablemente excesivo y en definitiva irreal, lo cual constituye un perjuicio para la empresa concursada como para los restantes acreedores que sí invocaron un crédito cierto.

- c) Ahora bien, de acuerdo al artículo 38° de la Ley General del Sistema Concursal, que establece como deber de la autoridad administrativa concursal el investigar la existencia y cuantía de los créditos cuyo reconocimiento le es solicitado, siendo que en el supuesto de que ni la AFP cuente con la información necesaria ni la Comisión o entidad delegada correspondiente pudiera determinar el monto de las remuneraciones, se deberá declarar infundada la solicitud de reconocimiento de créditos derivados de aportes previsionales impagos.
- d) De esta manera queda acreditado que la Resolución materia de impugnación no ha incurrido en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, motivo por la cual la demanda es desestimada.

## **6. Apelación<sup>54</sup>**

6.1. Con fecha 09 de enero de 2007, Demandante presentó el recurso de apelación contra la Resolución N° 10, por los siguientes argumentos:

- a) El juez ha valorado de forma incorrecta los artículos 154° y 155° de la Resolución N° 080-98-EF/SAFP que faculta a las AFP sobre la posibilidad de liquidar el monto de la obligación del empleador tomando como base de cálculo la Remuneración Máxima Asegurable para efectos del pago de primas del Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio:
- b) En ese sentido, se ha transgredido el principio de legalidad consagrado en la Constitución Política del Estado, norma última de imperativo cumplimiento, por cuanto se encuentra en discusión derechos laborales.

Asimismo, se advierte que la resolución materia de impugnación incurre en error de interpretación al no haber observado los aportes previsionales, al ser

---

<sup>54</sup> La Apelación fue concedida mediante Resolución N° 11 de fecha 12 de enero de 2007.

considerados créditos laborales y gozar de protección constitucional, toda vez que así lo ordena el artículo 24° de la Constitución.

Aunado a ello, se ha vulnerado la debida motivación de las resoluciones judiciales, por cuanto no se observa un orden lógico y jurídico en la toma de la decisión.

- c) Por último, indica que el superior al resolver, debe tener presente que la finalidad primordial de la demanda es la protección de los derechos afiliados, por cuanto los aportes previsionales, son considerados créditos laborales en estricta aplicación del artículo 24° de la Constitución.

## **7. Sentencia de vista**

### ***Resolución – Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia***

Mediante Resolución de fecha 11 de julio de 2008 emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, REVOCA la Sentencia contenida en la Resolución N° 10 y REFORMANDOLA declara FUNDADA la demanda, por las siguientes razones:

- a) Que, la Constitución señala en su artículo 24° que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier obligación del empleador, asimismo, el tribunal constitucional ha establecido que el pago de la remuneración y otros beneficios tiene preminencia sobre otra obligación, sea de carácter real o personal.
- b) Que, al presente caso le resulta pertinente la aplicación de lo dispuesto por el numeral 42 de la Ley del Sistema Concursal el mismo que reza que en los procedimientos de disolución y liquidación el orden de preferencia en el pago de los créditos es el siguiente: primero Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al sistema privado de pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la ONP, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador.

Por tanto, se desprende que los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones tienen el mismo orden de prelación que los beneficios sociales.

- c) En ese sentido, la Administración no ha tenido en consideración las normas antes glosadas, pues desestimó el pedido de la demandante, pese a la naturaleza de dicho reclamo, aplicando un precedente de observancia obligatoria sin tener en cuenta que es una obligación legal de las AFP el cobro de dichos aportes.

## **8. Interposición del Recurso de Casación<sup>55</sup>**

8.1. Con fecha 03 de diciembre de 2008 el INDECOPI interpuso un Recurso extraordinario de Casación contra la Sentencia de Vista, contenida en la Resolución de fecha 11 de julio de 2008, por los siguientes argumentos:

- a) Aplicación indebida del artículo 24 de la Constitución, así como el artículo 42° numeral 1) de la Ley General del Sistema Concursal, toda vez que no se discute si los aportes previsionales tienen o no la prioridad de pago de los créditos laborales, lo que se discute es, si la AFP demandante ha cumplido o no con acreditar fehacientemente la existencia y cuantía del crédito, cuyo reconocimiento solicitó al INDECOPI en un procedimiento concursal.
- b) Inobservancia del artículo V del Título Preliminar y el artículo 38° numeral 5) de la Ley General del Sistema Concursal, que consagran, respectivamente, el principio de colectividad en sede concursal y establecen la obligación de la autoridad administrativa concursal de investigar, por todos los medios, la existencia, origen, legitimidad y cuantía de aquellos créditos controvertidos o dudosos.
- c) Interpretación errónea del artículo 148 de la Resolución de Superintendencia N° 080-98-EF/SAFP ya que la sentencia de vista ha interpretado que esta norma establece que las Aseguradoras del Fondo de Pensiones están obligadas a iniciar las acciones correspondientes incluyendo dentro de las mismas la solicitud de reconocimiento de créditos laborales en un procedimiento concursal, por lo que INDECOPI debió reconocer los créditos previsionales invocados por la AFP demandante.

No obstante, la interpretación correcta de esta norma es que antes de iniciar cualquier acción administrativa de reconocimiento de créditos, la AFP, debe agotar las gestiones administrativas y judiciales, para determinar el monto exacto de la aportación adeudada.

---

<sup>55</sup> Mediante Resolución de fecha 09 de diciembre del 2008, se declaró PROCEDENTE el Recurso de Casación.



## **9. Sentencia – CAS N° 427-2009**

9.1. Mediante Resolución de fecha 28 de octubre de 2009 expedido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República se declara: (i) FUNDADO el recurso de casación interpuesto por INDECOPI y en consecuencia NULA la Sentencia de Vista de fecha 11 de julio de 2008 expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, (ii) CONFIRMARON la Resolución N° 10 de fecha 28 de noviembre de 2006 en cuanto declaró INFUNDADA la Demanda, por los siguientes fundamentos:

- a) Se evidencia de manera razonada que para efectos del procedimiento concursal, el reconocimiento de los citados créditos de origen previsional debía ser llevado a cabo sobre la base de sumas reales y percibidas efectivamente por el trabajador, mas no sobre sumas ficticias o presuntas asumidas por el acreedor, lo que de ser así, en este último caso, supondría un perjuicio en el deudor y los demás acreedores, por lo tanto, se ha incurrido en la causal de aplicación indebida del artículo 24 de la Constitución y del artículo 42 numeral 1 de la Ley N° 27809 Ley del Sistema Concursal, en tanto no está debidamente acreditado que los trabajadores hayan percibido efectivamente los citados beneficios laborales.
  
- b) Que, en el contexto descrito, si bien el artículo 148 de la Resolución N° 080-98-EF/SAFP dispone que para determinar el monto de los aportes previsionales impagos, la AFP podrá, entre otras opciones, tomar como base de cálculo el monto de la remuneración máxima asegurable, se trata en realidad de un supuesto que resulta procedente solo en aquellos casos en que el empleador sin justificación alguna incumpla con informar el monto real de la remuneración del asegurado, lo que no acontece en el presente caso pues tratándose de un procedimiento concursal, las acreencias deberán necesariamente calcularse sobre una base remunerativa que se corresponda con la realidad mas no conforme a la remuneración máxima asegurable.

Además, debe acotarse, conforme a lo señalado precedentemente, que las resoluciones administrativas impugnadas fueron expedidas al interior de un procedimiento concursal, el mismo que no se corresponde al supuesto de hecho regulado por la norma precitada habida cuenta que las mismas están referidas al procedimiento de cobranza de aportes cuando el empleador incumpla con ello dentro del plazo legal, teniendo mérito ejecutivo dichas

cobranzas emitidas por la AFP, por lo que, no pueden ser aplicados a un procedimiento concursal en donde se cautelan de manera preferente créditos laborales y previsionales; por ello se ha interpretado erróneamente la norma denunciada.

- c) Finalmente, que en relación al deber de verificación de la solicitud de los créditos previsionales reclamados por la demandante, resulta evidente que no resulta suficiente que el crédito sea de naturaleza previsional para los efectos del pago inmediato de los mismos, conforme parece equivocadamente entender la Sala de mérito, pues la norma contenida en el artículo 38 numeral 5 de la Ley N° 27809 exige a la Comisión que en el supuesto que surja alguna controversia o duda sobre la existencia de los créditos, se deberá investigar sobre la existencia, origen y legitimidad de los mismos; siendo innegable que la norma denunciada como inaplicada lo que pretende es el beneficio de todos los acreedores partícipes del procedimiento concursal.

### **3. PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE**

#### ***Identificación de los principales problemas del expediente***

A lo largo de lo señalado en el presente informe, se han podido identificar ciertos problemas jurídicos relevantes en los que versa la controversia del presente expediente, los cuales detallaré en la presente sección.

Es por eso que de la revisión y del análisis del expediente, he podido advertir e identificar los siguientes principales problemas jurídicos:

#### **1. Análisis de la protección constitucional de los aportes previsionales**

Uno de los principales argumentos de la demanda se basa en la supra protección de los aportes previsionales por parte del ordenamiento jurídico puesto que son considerados créditos laborales por la Constitución<sup>56</sup>. Al considerarse como derechos fundamentales de los trabajadores, la Demandante considera que su no reconocimiento genera un perjuicio irreparable a los trabajadores toda vez que se ven desprotegidos ante el incumplimiento de disposiciones legales imperativas realizado por el Indecopi.

---

<sup>56</sup> **Artículo 24.- Derechos del trabajador**

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.

Por su parte, Indecopi menciona que el hecho que tanto la Constitución y la legislación concursal les haya otorgado a los créditos provisionales el rango de créditos laborales no implica que deban ser reconocidos créditos irreales, perjudicando de esa manera a los demás acreedores.

En ese sentido, en esta sección analizaré la protección de los créditos provisionales otorgada por la Constitución y la legislación concursal y si dicha protección ha sido transgredida por el no reconocimiento realizada por el Indecopi.

## **2. Determinar si es válido que las AFP soliciten en un procedimiento concursal el reconocimiento de créditos en base a liquidaciones para cobranza calculadas sobre la remuneración máxima asegurable**

Luego de haber analizado la protección de los créditos provisionales, es preciso analizar ahora si el mecanismo de reconocimiento de los créditos realizado por el Indecopi fue el correcto.

Dentro de los argumentos de la demanda, la Demandante sostiene que el Art. 155 de la Resolución N° 080-09-EF/SAFP faculta a las AFP a calcular los aportes impagos en base a la remuneración máxima asegurable con la finalidad de no dejar desprotegido al trabajador por un actuar negligente o doloso del propio empleador.

Por su parte, Indecopi menciona que existe la posibilidad que una AFP emita liquidaciones de cobranza sobre la base de la Remuneración Máxima Asegurable como acto previo a la cobranza ejecutiva de los aportes provisionales impagos, pero estos comprenden un procedimiento administrativo particular que no puede ser utilizado en procedimiento concursales ya que no son suficiente para determinar la cuantía de los créditos solicitados.

Por tanto, ¿se puede considerar a las liquidaciones de cobranza sobre la base de la Remuneración Máxima Asegurable válidas para el reconocimiento de sus créditos en un proceso concursal? ¿un crédito liquidado en función a una Remuneración Máxima Asegurable afecta a los demás acreedores?

Con la finalidad de determinar si se ha cumplido con la formalidad correspondiente, considero necesario analizar y determinar cuál es el procedimiento adecuado para el reconocimiento de créditos.

## **3. Determinar la pertinencia de normas imperativas del sistema previsional a un procedimiento concursal**

Otro de los problemas jurídicos relevantes del presente expediente es determinar la pertinencia de normas previsionales a un procedimiento concursal.

Por un lado, en la demanda se menciona que la naturaleza y funcionalidad del mecanismo de Remuneración Máxima Asegurable regulada en el Art. 155 de la Resolución N° 080-09-EF/SAFP constituye un medio de protección del trabajador ante la falta de declaración por parte del empleador que otorga la facultad a la AFP de efectuar el cálculo de los aportes correspondientes tomando como referencia la Remuneración Máxima Asegurable. Dicha norma, según la Demandante, es de imperativo cumplimiento y la misma ha sido inaplicado de manera expresa en el procedimiento concursal.

En respuesta, Indecopi menciona que dicha norma es una norma reglamentaria emitida por una autoridad administrativa para regular las actividades desarrolladas por las AFPs, quien no tiene injerencia en la actuación de otras autoridades administrativas. Por ende, dicha norma no obliga a la autoridad administrativa concursal a reconocer créditos liquidados sobre base presunta, por ello no se estaría desconociendo ninguna norma imperativa.

Por tal motivo, resulta relevante analizar y verificar si el Art. 155 de la Resolución N° 080-09-EF/SAFP es una norma imperativa y que debió ser aplicada por Indecopi al momento de realizar el reconocimiento de los créditos invocados.

#### **4. Determinar la inaplicabilidad de normas de la Ley General del Sistema Concursal**

En la Sentencia de Segunda Instancia se puede observar que la Corte Suprema optó por inaplicar normas propias del procedimiento concursal, así como el precedente de observancia obligatoria.

En tal sentido, resulta pertinente analizar dicha posición a fin de determinar si fueron válidos dichos fundamentos.

En la siguiente sección procederé a explicar mi posición personal respecto de cada uno de los problemas jurídicos planteados en la presente sección.

#### **4. POSICIÓN PERSONAL RESPECTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE**

***Posición fundamentada sobre cada uno de los problemas del expediente***

En relación a los principales problemas jurídicos identificados en la Sección III anterior, a continuación, mi posición personal respecto de cada uno de ellos:

### 1. Análisis de la protección de los aportes previsionales

La protección de los créditos laborales proviene del art. 24 de la Constitución, el cual protege la remuneración y los beneficios sociales. La razón por la que se protege los créditos laborales es la naturaleza alimentaria de los mismos puesto que tanto el trabajador como sus dependientes logran subsistir gracias a la remuneración<sup>57</sup>.

Sobre el particular, el art. 2 del Decreto Legislativo 856 se pronuncia al respecto de la siguiente manera:

*“Los créditos laborales a que se refiere el artículo anterior tienen prioridad sobre cualquier otra obligación de la empresa o empleador. Los bienes de éste se encuentran afectos al pago del íntegro de los créditos laborales adeudados. Si éstos no alcanzaran el pago se efectuará a prorrata”* [Subrayado es propio]

Al respecto, Anthony Lizárraga menciona lo siguiente:

*“Nuestra legislación concursal protege a aquellos créditos que se encuentran en el primer orden de preferencia, como los créditos laborales o al menos esa es la idea de tal protección, dado que de algún modo son la parte más débil en una liquidación empresarial, debido a la asimetría informativa respecto de lo que le sucede al interior de la compañía”*<sup>58</sup>

En relación al orden de prelación, Ayrton Gonzales menciona:

*“En efecto, la razón de ser del orden de prelación es la de proteger a quien tenga menos posibilidades de afrontar el hecho de que no se le cancele un flujo de dinero que esperaba obtener, lo que justifica la diferenciación”*<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Anthony Lizárraga Vera-Portocarrero, “Unas de Cal, Otras de Arena”: A propósito de las modificaciones al Orden de Preferencia de Pago a los Acreedores.

<sup>58</sup> Lizárraga Vera-Portocarrero, «Unas de Cal, Otras de Arena»: A Propósito de las Modificaciones al Orden de Preferencia de Pago a los Acreedores, (Lima: Derecho & Sociedad Núm. 32, 2009) pp. 278.

<sup>59</sup> González Ibarquén Ayrton Alexis, *Derecho concursal y superprivilegios laborales: problemáticas entorno a su cesión y a su excesiva oponibilidad*, (Lima: Revista Aequitas, Núm. 1, 2018) pp. 112-122

En efecto, los créditos previsionales al originarse en la remuneración del trabajador poseen la misma suerte que los créditos laborales puesto que el Estado busca proteger a los trabajadores luego del cese de sus labores, velando por su subsistencia tanto en el momento de la jubilación o ante la ocurrencia de una contingencia sobreviniente que impida que pueda continuar laborando.

En relación a los aportes obligatorios de los trabajadores dependientes, es importante mencionar que los mismos se encuentran constituidos de la siguiente manera:

*“(...) Los aportes obligatorios están constituidos por:*

- a) El 10% (diez por ciento) de la remuneración asegurable destinado a la Cuenta Individual de Capitalización.*
- b) Un porcentaje de la remuneración asegurable destinado a financiar las prestaciones de invalidez y sobrevivencia y un monto destinado a financiar la prestación de gastos de sepelio;*
- c) Los montos y/o porcentajes que cobren las AFP por los conceptos establecidos en los literales a) o d) del artículo 24 de la presente Ley, aplicables sobre la remuneración asegurable”*

Respecto a los montos y/o porcentajes que cobran las AFPs, es decir las comisiones, en principio la Ley N° 27809<sup>60</sup>, Ley General del Sistema Concursal y su norma modificatoria, Ley N° 28709<sup>61</sup>, le otorgaron el primer orden de prelación a pesar que las mismas no tienen naturaleza previsional.

Posteriormente, en virtud del Decreto Legislativo N° 1050, se optó por excluir taxativamente a las comisiones cobradas por las AFPs quedando primero en la orden de preferencia los siguientes créditos:

*“Primero: Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse*

---

<sup>60</sup> **Primero:** Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse. Los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones incluyen expresamente los conceptos a que se refiere el Artículo 30 del Decreto Ley N° 25897, con excepción de aquellos establecidos en el literal c) de dicho artículo;

<sup>61</sup> **Primero:** Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse;

*gastos que por tales conceptos pudieran originarse. Los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones incluyen los conceptos a que se refiere el Artículo 30 del Decreto Ley N° 25897, con excepción de las comisiones cobradas por la administración de los fondos privados de pensiones*  
[Subrayado es propio]

En ese sentido, las comisiones a las AFPs no tienen una finalidad previsional puesto que las mismas constituyen el pago realizado para la administración de su fondo, dicho pago tiene una naturaleza contractual y no previsional, por lo que le corresponde el quinto orden de preferencia.

Ahora bien, en relación al presente expediente se puede observar que la empresa Velglei S.A. (en adelante, la “Demandada”) fue objeto de declaración de insolvencia<sup>62</sup> por la autoridad administrativa concursal del Indecopi. Es así como se determinó que los créditos que mantiene Demandante frente a la Demandada ascienden al monto de S/ 198,680,00 (Ciento noventa y ocho mil seiscientos ochenta y 00/100) por concepto de capital y S/ 225,756,41 (Doscientos veinticinco mil setecientos cincuenta y seis y 41/100) por concepto de intereses.

Posteriormente, el 08 de marzo del 2014, la Demandante solicitó tardíamente el reconocimiento de créditos ascendente a S/ 193,543.66 (Ciento noventa y tres mil quinientos cuarenta y tres y 66/100) por concepto de capital y S/ 45,831.05 (Cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y un con cinco y 5/100) por concepto de intereses. De los créditos mencionados anteriormente se precisa lo siguiente:

CONCEPTO	TOTAL	MONTO	FORMA DE CÁLCULO	PRONUNCIAMIENTO
CAPITAL	S/ 193,543.66	S/ 124,699.16	Remuneración Máxima Asegurable	NO RECONOCIDOS
		S/ 68,844.50	Sobre la base de la remuneración real	RECONOCIDOS
INTERESES	S/ 45,831.05	S/ 29,237.16	Remuneración Máxima Asegurable	NO RECONOCIDOS
		S/ 16,593.89	Sobre la base de la remuneración real	RECONOCIDOS

Como se puede observar, los créditos han sido reconocidos en parte, solo aquellos créditos que se encontraban sustentados en la remuneración real del trabajador.

<sup>62</sup> Mediante Resolución N° 2185-1999/CRP-INDECOPI, de fecha 13 de julio de 1999, emitida por la entonces Comisión de Salida del Mercado del INDECOPI con sede en la Universidad de Lima.

Al respecto, la Demandante considera que dicho reconocimiento parcial de los créditos vulnera la protección otorgada por la Constitución ya que produce un perjuicio irreparable a los trabajadores. En ese mismo sentido se pronuncia la Sentencia de Segunda Instancia, indicando que los beneficios sociales tienen la preferencia de pago ante cualquier otra obligación.

Al respecto, es importante mencionar que en cuanto al reconocimiento de créditos se debe tener presente que el mismo consiste en realizar una verificación de los créditos invocados por los acreedores a fin de determinar la legitimidad para participar en la Junta de Acreedores y, en consecuencia, el peso de su voto para poder participar en la toma de decisiones sobre el destino de la empresa<sup>63</sup>.

Respecto al reconocimiento de crédito, la LGSC establece un procedimiento para que los acreedores puedan solicitar el reconocimiento de los mismos, lo que implica que los acreedores deban presentar toda la documentación e información necesarias para sustentar el reconocimiento de sus créditos.

Ahora bien, en relación al procedimiento para el reconocimiento de créditos laborales, el Tribunal del Indecopi emitió el precedente de observancia obligatoria a través de la Resolución 088-1997-TDC que establece los criterios que deberán seguirse para investigar y determinar la existencia, legitimidad y cuantía de los créditos laborales. Es importante tomar en cuenta que dicho precedente se aprueba en atención a la dificultad que tienen los acreedores laborales para obtener el reconocimiento de sus créditos debido a la falta de documentos sustentatorios tales como controles de vacaciones, asistencia, contratos de trabajo, boletas de pago y otros que se encuentra en poder del empleador.

Al respecto, el precedente antes mencionado indica lo siguiente:

*“Cuando un acreedor laboral solicite el reconocimiento de sus créditos la Comisión deberá:*

- i. Verificar o exigir que la solicitud de reconocimiento de créditos se sustente con cualquiera de los siguientes documentos:*
  - 0. Copia de cualquiera de los títulos de ejecución de carácter laboral (actas de conciliación judicial o extrajudicial, resoluciones administrativas firmes y laudos*

---

<sup>63</sup> Calle Casusol Jean Paul, *Persecutoriedad laboral, garantías reales y concurso: un modelo para desarmar*, (Lima: IUS ET VERITAS, 2006) pp. 142.



*arbitrales), actas de conciliación suscritas ante la autoridad administrativa de trabajo y las actas de conciliación extrajudicial o sentencia que determina la existencia y cuantía de los créditos de origen laboral.*

- 1. Documento suscrito por el representante de la empresa deudora, donde conste el importe de los créditos cuyo reconocimiento se solicita, en cuyo caso procederá el reconocimiento inmediato.*
- 2. Documento de parte donde conste el importe de los créditos cuyo reconocimiento se solicita o autoliquidación detallada, debidamente suscrita por el trabajador, la misma que tendrá carácter de declaración jurada;*
- ii. De presentarse la autoliquidación o determinación de los créditos, se deberá poner dicho documento en conocimiento de la empresa insolvente, a fin que en un plazo no mayor de tres días hábiles se pronuncie al respecto (reconocimiento total o parcial, silencio de la empresa insolvente y oposición total)*
- iii. Si la empresa insolvente se opone parcialmente o se opone totalmente a los créditos contenidos en la autoliquidación, deberá presentar la documentación que sustente su oposición:*
  - Copia de las partes pertinentes del Libro de Planillas*
  - Una liquidación suscrita por el representante legal de la empresa insolvente;*
  - Copia de los convenios colectivos o individuales;*
  - Otros*
- iv. En caso que la empresa insolvente se oponga a la autoliquidación laborada por el acreedor laboral y presente la documentación sustentatoria de su oposición, se deberá ponerlo en conocimiento de la otra parte y remitir al Ministerio de Trabajo y Promoción Social para que proceda a liquidar los créditos laborales con vista de los libros de planillas y demás libros contables.*
- v. La liquidación practicada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social”*

Por otro lado, respecto a las solicitudes de reconocimiento de créditos previsionales derivados de aportes impagos liquidados sobre la base de la Máxima Remuneración Asegurable, el Indecopi emitió un precedente de observancia obligatoria a través de la Resolución N° 011-977-TDC, el cual fue modificado por la Resolución N° 0100-2001/TDC-INDECOP quedando de la siguiente manera:

*“Cuando una AFP solicite el reconocimiento de créditos derivados de aportes previsionales impagos, liquidados sobre la base de la remuneración asegurable máxima del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley de Reestructuración Patrimonial, la Comisión, deberá:*

- a) Verificar que, además de presentar la Liquidación para Cobranza, la AFP haya declarado que en el historial previsional correspondiente no cuenta con información sobre la remuneración real.*
- b) Constatar si la información necesaria para determinar el monto real de los aportes previsionales impagos, o parte de ella, obra en alguno de los expedientes administrativos a su cargo, en cuyo caso la pondrá a disposición de la AFP para que ésta pueda reliquidar su acreencia.*
- c) En caso de no contar con toda o parte de la información relevante, en los expedientes a su cargo, requerir a la empresa deudora la presentación de copia de las partes pertinentes del libro de planillas, de las boletas de pago o de cualquier otro documento en el que consten las remuneraciones de los trabajadores afiliados, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones, en caso de no absolverse el requerimiento en el plazo otorgado.*
- d) Absuelto el requerimiento, remitir a la AFP copia de la documentación recibida, para que modifique su solicitud reliquidando la deuda previsional sobre la base de las remuneraciones reales, luego de lo cual se procederá al reconocimiento de los créditos en base a la nueva liquidación presentada.*
- e) Si la AFP no cumple con reliquidar su crédito, sobre la base de la información en poder de la comisión o sus entidades delegadas, de la presentada por el deudor, o del historial previsional, según sea el caso, en el plazo concedido por la Comisión para tal efecto, se declarará infundada la solicitud.*

*En el supuesto de que ni la AFP cuente con la información necesaria ni la Comisión o entidad delegada correspondiente pudiera determinar el monto de las remuneraciones, se deberá declarar infundada la solicitud”*

La finalidad del mencionado precedente es la tutelar los derechos de los demás acreedores que podrían verse afectados por el reconocimiento de un crédito irreal y excesivo.

En concordancia al precedente antes citado, la jurisprudencia se pronuncia de la siguiente manera:

*“(…) cuando una AFP solicite el reconocimiento de créditos derivados de aportes previsionales impagos, liquidados sobre la base de la remuneración asegurable máxima del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio deberá constatar y verificar la certeza de los montos de las remuneraciones presentadas en las liquidaciones de cobranzas mediante el historial previsional correspondiente, copia de las partes pertinentes del libro de planillas, boletas de pago o cualquier otro documento en el que conste las remuneraciones de los trabajadores afiliados, caso contrario, esto es, que ni la Comisión, AFP o deudora cuenten con la información necesaria a efectos de determinar el monto de las remuneraciones, se deberá declarar infundada dicha solicitud (…)”<sup>64</sup> [el subrayado es propio]*

*“(…) se evidencia de manera razonada que para efectos del procedimiento concursal, el reconocimiento de los citados créditos de origen previsional debió ser llevado a cabo sobre la base de sumas reales y percibidas efectivamente por el trabajador, mas no sobre sumas ficticias o presuntas asumidas por el acreedor, lo que de ser así, en este último caso, supondría un perjuicio en el deudor y los demás acreedores”<sup>65</sup> (…)* [el subrayado es propio]

Como se puede observar, la Resolución N° 470-2005/TDC-INDECOPI, impugnada por la Demandante, en ningún extremo ha negado la preferencia de los créditos laborales y previsionales ya que, como se ha podido verificar en los distintos precedentes emitidos por Indecopi, se ha buscado aclarar criterios a fin de cautelar los legítimos intereses de los acreedores.

En ese orden de ideas, se puede verificar de la lectura del expediente y de la revisión de los medios probatorios, no existe información relacionada a la remuneración real de los afiliados en los que se encuentra sustentado el pedido de reconocimiento de

---

<sup>64</sup> CAS N° 246-2010 LIMA, de fecha 17 de agosto del 2010

<sup>65</sup> CAS N° 3583-2009-LIMA, de fecha 17 de marzo del 2012

créditos ya que ni Velglei ni la demandante han cumplido con presentar la documentación en torno a la remuneración de los afiliados<sup>66</sup>.

Sobre el particular, Jean Paul Calle sostiene lo siguiente:

*“Sin embargo, en el caso de que existan elementos de juicio o indicios que creen duda respecto de la existencia de los créditos laborales invocados, el precedente establece que la autoridad concursal deberá desarrollar un procedimiento de investigación más riguroso a efectos de determinar la existencia, origen, legitimidad y cuantía de los mismos”<sup>67</sup>*

En adición a lo antes mencionado, no solo no se tiene evidencia de la remuneración real de los afiliados, tampoco se ha podido acreditar el vínculo laboral de los afiliados con Velglei, siendo esto el principal requisito para el reconocimiento de créditos de origen laboral<sup>68</sup>.

Cabe mencionar que las pretensiones que buscan recuperar los aportes efectivamente descontados a los trabajadores y no abonados o depositados por el empleador en forma oportuna a la AFP son imprescriptibles<sup>69</sup>, por ende, no existiría una transgresión a los derechos laborales de los trabajadores ante un no reconocimiento de los créditos previsionales.

## **2. Determinar si es válido que las AFP soliciten en un procedimiento concursal el reconocimiento de créditos en base a liquidaciones para cobranza calculadas sobre la remuneración máxima asegurable**

En amparo del art. 74.6 de la LGSC<sup>70</sup>, la Demandante solicitó el reconocimiento de créditos generados con posterioridad a la fecha de la publicación del sometimiento de Velglei al Proceso Concursal Ordinario. Como parte de la solicitud de reconocimiento de créditos, Velglei adjuntó Liquidaciones para Cobranza haciendo mención que en

---

<sup>66</sup> Historial previsional correspondiente, copia del libro de planillas, boletas de pago o cualquier otro documento donde conste las remuneraciones de los afiliados.

<sup>67</sup> Calle Casusol Jean Paul, *Ob. Cit.*, 139

<sup>68</sup> **Artículo 39º.- Documentación sustentatoria de los créditos**

39.4 Para el reconocimiento de los créditos de origen laboral, y siempre que se haya acreditado el vínculo laboral de los trabajadores, la Comisión reconocerá los créditos invocados, en mérito a la autoliquidación presentada por el solicitante, salvo que el deudor acredite haberlos pagado o, de ser el caso, la inexistencia de los mismos.

<sup>69</sup> Artículo 3 de la Ley N° 30425, publicada el 21 abril 2016.

<sup>70</sup> **Artículo 74º.- Acuerdo de disolución y liquidación**

74.6 Conforme lo establecido en el artículo 16.3 con el acuerdo de disolución y liquidación se genera un fuero de atracción concursal de todos los créditos, debiendo incluso, los titulares de créditos generados con posterioridad a la fecha establecida en el artículo 32º, presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos, para efectos de su participación en Junta y su cancelación en el procedimiento, de ser el caso. Corresponde a la Comisión emitir las resoluciones de reconocimiento posteriores a la fecha de difusión del concurso considerando para tal efecto la fecha de la reunión que acuerda la disolución y liquidación.

el historial previsional de los afiliados no se cuenta con información sobre la remuneración real de los afiliados, por ende, han procedido a liquidar sobre la base de la remuneración asegurable máxima del seguro invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, de conformidad con el art. 37 del Decreto Supremo N° 054-97-EF<sup>71</sup>.

Al respecto, la Comisión y el Tribunal de Indecopi sostuvieron que cuando una AFP realice una solicitud de reconocimiento de créditos derivados de aportes previsionales impagos que hubiesen sido liquidados sobre la base de la remuneración asegurable máxima realizada se deberá seguir el procedimiento establecido por el Tribunal del Indecopi mediante Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolución N° 011-97-TDC y modificado por Resolución N° 0100-2001/TDC-INDECOPI. Por ende, al no contar, tanto la Comisión<sup>72</sup> como la Demandante, con la documentación correspondiente tales como planillas y/o boletas de pagos que permiten verificar la remuneración real, corresponde declarar infundada dicha solicitud y reconocer en parte los nuevos créditos.

Como se observa, la discusión radica en la validez de reconocimiento de créditos en base a Liquidaciones para Cobranza calculadas sobre la remuneración máxima asegurable.

Respecto al pago de los aportes previsionales, es preciso mencionar que los empleadores deben efectuar el pago a la AFP de los aportes que fueron retenidos a sus trabajadores en el plazo de cinco (5) días del mes siguiente al mes de devengue. En caso el empleador no cumpla con el pago en el plazo antes mencionado deberá presentar una Declaración Sin Pago (en adelante, “DSP”).

---

**71 Artículo 37.- Liquidaciones para Cobranza. Contenido**

Corresponde a las AFP determinar el monto de los aportes adeudados por el empleador a que se refiere el Artículo 30 precedente y proceder a su cobro. Para tal efecto, las AFP emitirán una Liquidación para Cobranza, sin perjuicio de seguir el procedimiento que se establezca mediante Resolución de Superintendencia de AFP, con las formalidades requeridas. La Liquidación para Cobranza constituye título ejecutivo. La Liquidación para Cobranza tendrá el siguiente contenido:

- a) Denominación de la AFP, nombre y firma del funcionario que práctica la liquidación;
- b) Nombre, razón social o denominación del empleador;
- c) Los períodos de aportación a los que se refiere;
- d) El nombre de los trabajadores cuyos aportes se adeudan;
- e) El detalle de los aportes adeudados, incluyendo:
  - Aportes que corresponden a la Cuenta Individual de Capitalización del trabajador;
  - Conceptos propios a las AFP;
  - Conceptos por seguros de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio;
  - Impuestos aplicables conforme a ley;
- f) Los intereses moratorios devengados hasta la fecha de su elaboración; y,
- g) Los demás elementos que establezca la Superintendencia mediante Resolución. Para dicho efecto, la institución aprobará los formatos necesarios para el cobro de los aportes obligatorios e intereses moratorios.

(...)

<sup>72</sup> Con fecha 24 de noviembre de 2004, la Comisión solicitó información a la entidad liquidadora de Velglei, sin embargo, no se cumplió con atender el requerimiento formulado.

Sin perjuicio de ello, si el empleador no efectúa el pago en el plazo correspondiente, la AFP podrá iniciar un proceso de cobranza, el cual consta de diferentes mecanismos:

- a. **Cobranza Administrativa:** Este mecanismo de cobranza es el medio por el cual las AFPs buscan recuperar los aportes que han sido retenidos a los trabajadores afiliados o sincerar la deuda que se tiene con la empresa previo al inicio de un proceso de cobranza judicial.
  - i. Si la empresa presenta la DSP<sup>73</sup>: La presentación de la DSP representa un reconocimiento de la deuda previsional por parte del empleador. El empleador tiene un plazo de 30 días hábiles<sup>74</sup> para cancelar lo adeudado, de lo contrario la AFP deberá iniciar el proceso de Cobranza Judicial.
  - ii. Si la empresa no presenta la DSP: Dicho proceso tendrá una duración máxima seis (6) meses contados a partir del primer día calendario del mes siguiente al del vencimiento de la obligación del empleador. Excepcionalmente, en aquellos casos que el monto de la deuda no compense adecuadamente los costos que la AFP asumiría para la cobranza o en el supuesto en que la AFP no obtuviera respuesta por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción Social la AFP podrá ampliar por única vez, el plazo del procedimiento hasta por tres (3) meses adicionales. Asimismo, se deberá seguir con el siguiente procedimiento:

---

<sup>73</sup> **Artículo 151.-** Para efectos de lo establecido en el artículo 35 de la Ley, el empleador formulará la "Declaración sin Pago" (DSP) dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 108 del presente Título. Dicho documento representa un reconocimiento de la deuda previsional por parte del empleador.

Al momento de presentar la Declaración sin Pago, el empleador deberá seguir el siguiente procedimiento:

- a) Llenar íntegramente la DSP, verificando que toda la información consignada en ella se registre en las tres (3) copias de la "Planilla de Declaración y Pago de Aportes Previsionales". Para tal efecto los formatos deberán ser impresos en papel autocopiativo.
- b) Acercarse a una agencia u OAP de la AFP o a una institución recaudadora que mantenga convenio con la AFP, con el original del formato "Declaración Sin Pago de Aportes Previsionales", incluido como anexo XXIX al presente Título, y con las tres (3) copias del formato "Planilla de Declaración y Pago de Aportes Previsionales", incluido como anexo XXX de la presente Resolución.
- c) Una vez recibidos, los formatos se distribuirán de la siguiente manera:

La DSP será entregada a la AFP o institución recaudadora, según corresponda. En este último caso, la institución recaudadora entregará el original de la DSP a la respectiva AFP en un plazo no mayor de tres (3) días de recibido.

Las tres (3) copias del formato "Planilla de Declaración y Pago de Aportes Previsionales" serán devueltas al empleador con el sello de recepción respectivo en cada una de ellas, con el fin de ser utilizados para el pago de la deuda declarada, según el procedimiento señalado en el artículo 153.

Adicionalmente, el empleador adjuntará a la DSP el "Detalle Adicional de la Planilla de Pago de Aportes Previsionales" que, como anexo XXI, forma parte integrante del presente Título, el cual se distribuye de la siguiente manera:

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| - Original      | - AFP                     |
| - Primera copia | - empleador               |
| - Segunda copia | - institución recaudadora |

<sup>74</sup>El empleador que cumpla con cancelar voluntariamente el monto total adeudado y declarado según lo establecido en el artículo 151, dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo para el pago de aportes sin mora, estará afecto al 50% de los intereses moratorios, sin perjuicio del pago del principal. Transcurrido dicho plazo, el empleador podrá cancelar el íntegro de la deuda dentro de los veinte (20) días siguientes y estará afecto al 80% de los intereses moratorios.

- La AFP elaborará y remitirá a los empleadores una "Liquidación Previa" (en adelante, "LP") y deberá ser notificada al empleador con cargo de recepción.
- La AFP determinará el monto adeudado por el empleador en función de la historia previsional del afiliado, tomando como base la última remuneración registrada en la AFP. De no contar con dicha información, la AFP podrá determinar el monto de la obligación del empleador en función a la Remuneración Máxima Asegurable.

**b. Cobranza Judicial:** Cuando una empresa no efectúa el pago de aportes previsionales de sus trabajadores durante el plazo de Cobranza Administrativa, la AFP podrá iniciar el proceso de Cobranza Judicial ante el Poder Judicial en los casos establecidos por el art. 158 de la Resolución 080-98-EF-SAFP<sup>75</sup>. Para efectos del proceso judicial, la AFP deberá emitir una Liquidación Para Cobranza (en adelante, "LPC") con las siguientes condiciones:

- La LPC tendrá mérito ejecutivo.
- Para la determinación del monto adeudado por el empleador, la AFP deberá emitir la LPC en base a la información consignada en la DSP o en las boletas de pago, respectivamente.
- Cuando se tenga el historial previsional de trabajador, la AFP emitirá la LPC en base a la última remuneración conocida del afiliado ajustada según el Índice de Precios al Consumidor para Lima Metropolitana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o el índice que lo sustituya.

---

<sup>75</sup> **Artículo 158.-** Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 154, la AFP deberá interponer la correspondiente demanda judicial de cobranza en las siguientes situaciones:

- a) Cuando el empleador pese a haber presentado la DSP, no haya efectuado el pago de los aportes dentro de los treinta (30) días siguientes de vencido el plazo de veinte (20) días a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 153 del presente Título."
- b) Cuando haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 154 sin que empleador haya efectuado la regularización correspondiente y la AFP cuente con la historia previsional del trabajador.
- c) Cuando, en base a las boletas remitidas por el trabajador u otro documento probatorio de la deuda previsional, la AFP determine los aportes adeudados por el correspondiente empleador.
- d) Cuando la Superintendencia lo determine.

Para los casos de los incisos a) y b), el plazo con que cuenta la AFP para la interposición de la demanda judicial es de treinta (30) días calendario posteriores a las fechas previstas en los precitados incisos; tratándose del inciso c), el referido plazo se computará desde que se haya tomado conocimiento, de modo pleno, de la deuda previsional cierta del empleador. Excepcionalmente, por razones debidamente justificadas y sustentables, las AFP podrán hacer uso de plazos adicionales.

- En caso de no contar con antecedentes previsionales del afiliado, la AFP estará a las resultas de la inspección efectuada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social para efectos de interponer la demanda judicial de cobranza.

Habiendo hecho un amplio repaso de los distintos mecanismos que tienen las AFP para el cobro de aportes impagos se ha podido advertir que Unión Vida ha confundido LPC y LP.

La LP es la liquidación previa que se produce en la cobranza administrativa, la cual se calcula en función del historial previsional del afiliado y tomando como base la última remuneración registrada en la AFP. Solo en caso de no contar con dicha información, la AFP podrá, efectivamente, determinar el monto de la obligación del empleador en función a la Remuneración Máxima Asegurable. Cabe destacar que dicha liquidación no tiene mérito ejecutivo.

Por otro lado, la LPC sí tiene mérito ejecutivo y se calcula en base a la información consignada en la DSP o en las boletas de pago. Así como también sobre la base de la última remuneración conocida del afiliado ajustada según el Índice de Precios al Consumidor para Lima Metropolitana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o el índice que lo sustituya, siempre que se tenga el historial previsional de trabajador. Cuando esto último no suceda, la AFP deberá esperar que el Ministerio de Trabajo y Promoción Social realice una inspección para poder interponer la demanda judicial de cobranza<sup>76</sup>.

Como se puede observar, solo en la cobranza administrativa se permite emitir una liquidación sobre base presunta ya que en sede judicial se requiere la deuda previsional cierta del empleador. Esto se justifica ya que, en la cobranza administrativa, el hecho de darle la posibilidad a las AFPs de cobrar una suma mayor a lo que realmente le adeuda el empleador sirve de incentivo para que el empleador informe el monto real de la remuneración sobre la cual se busca liquidar la acreencia.

Ahora bien, un procedimiento concursal que es, en sí mismo, un procedimiento administrativo que se rige tanto por Ley General del Sistema Concursal – Ley N°

---

<sup>76</sup> **Artículo 156.-** Transcurridos treinta (30) días calendario desde la emisión de la LP, sin que el empleador cumpla con regularizar la deuda, la AFP, bajo responsabilidad, deberá comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción Social la relación de empleadores y afiliados que adeudan aportes, para efectos que inicie las inspecciones tendientes a determinar el monto exacto de la deuda.



27809 como por la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador – Ley N° 27444, por ende, se rige bajo el principio de verdad material<sup>77</sup>.

Al respecto, Roberto Jiménez menciona lo siguiente:

*“Los hechos son los que priman ante las simples argumentaciones. Los hechos deben ser materia de probanza y, en dicha etapa, ellos deben ser verificados antes que la autoridad administrativa tome una decisión en el caso concreto. Caso contrario, si los hechos no responden a los términos de la solicitud, pues simplemente se concluye que esta no acredita la veracidad necesaria que acredite el pronunciamiento favorable por parte de la entidad pública<sup>78</sup>.” [subrayado es propio]*

En ese sentido, para efectos de un procedimiento concursal el reconocimiento de los créditos invocados se debe realizar sobre la base de sumas reales y percibidas efectivamente por el trabajador ya que aceptar y reconocer sumas ficticias o presuntas vulneraría los derechos de los demás acreedores que sí cumplieron con acreditar sus créditos, así como también vulneraría el deber de actuación de las autoridades administrativas, en este caso Indecopi.

Por ende, el reconocimiento de la obligación por parte de la empresa deudora no exime a Indecopi de su deber de verificación, ya que en un régimen concursal la solicitud de reconocimiento de un crédito no se opone solamente a los intereses de la insolvente, sino que también tiene efectos sobre los derechos de los demás acreedores de ésta que, con cada crédito reconocido ven reducida su participación, tanto en la junta de acreedores, como en la posibilidad de pago de sus créditos<sup>79</sup>.

En concordancia a ello, la LGSC dispone lo siguiente:

*“En los casos de créditos invocados por acreedores vinculados al deudor y en aquéllos en que surja alguna controversia o duda sobre la existencia de los mismos, el reconocimiento de dichos créditos solamente podrá ser efectuado por la Comisión, la que investigará su existencia, origen,*

---

<sup>77</sup> **1.11. Principio de verdad material.** - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas (...)

<sup>78</sup> Jiménez Murillo, Roberto, *Los principios de impulso de oficio y verdad material en el procedimiento administrativo*, (Lima: Derecho PUCP N° 67, 2011) pp. 189-206

<sup>79</sup> Echeandía Chiappe Luis Francisco, *Odisea concursal y crisis empresarial: verdades, mentiras y leyendas tras el mito de una ley con fama de flotador*, (Lima: Ius Veritas N° 22, 2001), pp. 196

legitimidad y cuantía por todos los medios, luego de lo cual expedirá la resolución respectiva” [Subrayado es propio]

Asimismo, el artículo V del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal regula al principio de Colectividad señalando que lo óptimo es buscar la participación concursal generando un beneficio social, así como señalar que el interés colectivo de la masa de acreedores se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor.

Luis Francisco Echeandía sostiene:

*“El principio de colectividad de los procesos, que algunos autores identifican como la aplicación del principio de universalidad respecto de los acreedores, está referido, precisamente, a la naturaleza misma de los procesos concursales, es decir, a la concursalidad como elemento característico y necesario. Es la intervención en el proceso de todos los acreedores a quienes alcanza la aplicación del principio de universalidad<sup>80</sup>”*

Es en virtud a tal razonamiento que toda norma deberá ser interpretada conforme a una repartición equitativa y ordenada de créditos reconocidos, así como apuntar a la concretización del interés general, esto es, que deberá interpretarse según el caso en concreto, es decir, el beneficio en interés de la colectividad se obtendrá a partir de una base cierta y concreta, es decir que sea cuantificable en atención a los aportes otorgados por el empleador, toda vez que únicamente se podrá efectuar el cálculo de la máxima cuando el empleador negligentemente no consigne los importes para la cuantificación de los beneficios sociales.

Materializado el importe, recién se podrá establecer la repartición equitativa y proporcionada en base a los créditos reconocidos por el Indecopi, de conformidad con los artículos 38 y 42 de la referida LGSC.

Por todo lo antes expuesto, considero que no resulta válido que las AFP soliciten en un procedimiento concursal el reconocimiento de créditos en base a liquidaciones para cobranza calculadas sobre la remuneración máxima asegurable.

### **3. Determinar la pertinencia de normas imperativas del sistema previsional a un procedimiento concursal**

---

<sup>80</sup> *Idem*

Uno de los fundamentos de la demanda se encuentra relacionada al carácter imperativo del mecanismo de Remuneración Máxima Asegurable ya que Unión Vida considera que el mencionado mecanismo forma parte de un sistema integral protector del trabajador y amparado por la Constitución, por tal motivo, no admite pacto en contrario y debe ser respetada por la integridad de los actores jurídicos.

En respuesta, Indecopi menciona que la Resolución N° 080-98-EF/SAFP es una norma reglamentaria emitida por una autoridad administrativa competente para regular únicamente actividades desarrolladas por las AFPs. Asimismo, recalca que la SBS no tiene competencia para regular la actuación de otras autoridades administrativas como INDECOPi. Por último, menciona que el procedimiento para el reconocimiento de créditos en base a liquidaciones para cobranza calculadas sobre la remuneración máxima asegurable no tiene carácter imperativo ya que solo establece una facultad para un supuesto específico.

Ahora bien, en relación al argumento de la Unión Vida es importante mencionar que una norma imperativa es aquella norma que no admite acuerdo en contrario. Al respecto, Marcial Rubio refiere lo siguiente:

*“Desde el punto de vista de su vocación normativa, las normas pueden clasificarse en imperativas y supletorias. La norma imperativa es aquella que debe ser necesariamente cumplida por los sujetos, sin que exista la posibilidad lógico-jurídica contraria<sup>81</sup>”.*

En contraposición a las normas imperativas se encuentran las normas supletorias que hacen referencia a aquellas normas que se aplica en ausencia de otra.

*“La norma supletoria es aquella que solo se aplica cuando no hay otra que regule el asunto; o la que se aplica a las relaciones privadas cuando las partes no han hecho declaración de voluntad expresa sobre el asunto. Ejemplo es el artículo 1364 del Código Civil que dice: «Los gastos y tributos que origine la celebración de un contrato se dividen por igual entre las partes, salvo disposición legal o pacto distinto»<sup>82</sup>”*

Al respecto, Luis Fernando Castellanos menciona que “el Derecho Concursal por más que sea una rama jurídica que tiene una aplicación especial y procedimientos sui generis, a la vez se nutre de otras instituciones del Derecho como lo son el Derecho

---

<sup>81</sup> Rubio Correa Marcial, *El Sistema Jurídico: Introducción al derecho*, (Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), pp. 99

<sup>82</sup> *Ídem*

Constitucional, el Derecho Mercantil, el Derecho Procesal, el Derecho Administrativo, el Derecho Civil, entre otros.<sup>83</sup>

Sin perjuicio a ello, se puede apreciar que el artículo específico que regula la Remuneración Máxima Asegurable es el 155°, dicho dispositivo legal establece el procedimiento a seguir por las AFPs en los casos en que se presenten aportes impagos. Así, el inciso c) del precitado artículo dispone el mecanismo para determinar el monto adeudado, siendo estos los siguientes:

- i) En función al historial previsional del afiliado, tomando como base la última remuneración registrada en la AFP;
- j) De no contar con la información mencionada anteriormente, la AFP podrá determinar el monto de la obligación del empleador en función a la Remuneración Máxima Asegurable u otra que establezca la Superintendencia.

De una lectura del segundo mecanismo, se puede observar que la norma no es imperativa ya que solo permite utilizar dicho mecanismo en defecto del primero, es decir que si la AFP cuenta con el historial previsional del afiliado no podrá calcular el monto adeudado sobre la base de la Remuneración Máxima Asegurable.

#### **4. Determinar la inaplicabilidad de normas de la Ley General del Sistema Concursal**

La Sentencia de Segunda Instancia que declaró nula la Resolución N° 0470-2005/TDC-INDECOPI sostiene que el INDECOPI no ha tomado en consideración el art. 24 de la Constitución y el art. 42, inc. 1 de la LGSC y, además, señala que el Precedente de Observancia Obligatoria del INDECOPI no es vinculante para ellos.

En tal sentido, como se puede observar, la Corte Suprema ha inaplicado lo dispuesto en el Precedente y lo establecido por el art. V y 38°, inc. 5 de la LGSC por preferir lo descrito en el art. 24 de la Constitución. Es decir, la Corte Suprema advirtió que en el presente caso existe un conflicto de normas jurídicas, de un lado la norma constitucional que establece que el pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación y, de otro lado, la norma legal que establece que la Comisión tiene que investigar el origen, legitimidad y cuantía para el reconocimiento de los créditos invocados.

---

<sup>83</sup> Castellanos Sánchez, Luis Fernando, *Las mil y una noches del derecho concursal, unos objetivos y principios de cuento*, (Lima: Themis N° 57, 2009) pp. 222

La Corte Suprema sustenta su decisión de declarar nula la Resolución Administrativa en el artículo 138 de la Constitución que establece lo siguiente:

*“En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”*

Asimismo, el art. 14 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala lo siguiente:

*“(…) cuando los magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso de especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación. En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la inaplicabilidad de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular”*

Sobre la base de lo antes mencionado, considero que la Corte Suprema ha realizado un control difuso de constitucionalidad puesto que está inaplicando normas del procedimiento concursal.

Sobre el control difuso, el Tribunal Constitucional menciona lo siguiente:

*“El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preterir la aplicación de una norma cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple, requiriéndose, para que él sea válido, la verificación en cada caso de los siguientes presupuestos:*

- *Que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional (artículo 3º de la Ley N.º 23506).*
- *Que, la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia.*
- *Que, la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la Constitución, en virtud del principio enunciado en la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional<sup>84</sup>*

En el presente caso, no se cumple con todos los presupuestos mencionados previamente ya que, en primer lugar, el no reconocimiento de créditos de origen previsional se sustenta en el deber de la Comisión de investigar la existencia, origen, legitimidad y cuantía de los mismos. En segundo lugar, las normas inaplicadas no son incompatibles con el art. 24 de la Constitución puesto el hecho que los créditos sean de naturaleza previsional no justifica que los mismos sean reconocido sin determinar su existencia toda vez no se está discutiendo el carácter preferente de dichos créditos, sino la real existencia y cuantía de los mismos.

Por tal motivo, no estoy de acuerdo con la Sentencia de Segunda Instancia pues hacen una evaluación superficial sobre el asunto, es decir, no se analiza los alcances de los artículos 148, 154 y 155 de la Resolución N° 080-98-EF/SAFP, ni los artículos V, 38, inc. 5 de la LGSC, normas que -haciendo una interpretación sistemática y evaluando la concordancia práctica- no se contraponen en el caso en concreto al artículo 24 de la Constitución, pues dicho error in iudicandocometido por el Ad quem, lleva a determinar que una cuantificación apropiada sobre el cálculo de beneficios sociales puede efectuarse sobre la remuneración máxima asegurable del seguro, colisionando el interés general en el procedimiento concursal.

Se evidencia el error in iudicando, de manera que el reconocimiento de los citados créditos de origen previsional debía ser llevado a cabo sobre la base de sumas reales y percibidas efectivamente por el trabajador, mas no sobre sumas ficticias o presuntas asumidas por el acreedor, lo que de ser así, en este último caso, supondría un perjuicio en el deudor y los demás acreedores, por lo tanto, se ha incurrido en la causal de aplicación indebida del artículo 24 de la Constitución y del artículo 42 numeral 1 de la LGSC, en tanto no está debidamente acreditado que los trabajadores hayan percibido efectivamente los citados beneficios laborales.

---

<sup>84</sup> EXP. N.º 1124-2001-AA/TC, de fecha 11 de julio del 2002.

Como es de advertirse, la infracción normativa es evidente y se manifiesta en el extremo de aplicar indebidamente el artículo 24 de la Constitución, así como el artículo 42 de la Ley General del Sistema Concursal, dicho vicio afecta la sentencia de vista, de tal manera que no analiza a fondo la controversia, pues sabemos que dentro de la características de la Constitución es que ella es incompleta (necesita de regulación legislativa para la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, en este caso los derechos de créditos de los otros acreedores del procedimiento concursal), es imprecisa (del mismo artículo 24 se advierte que no establece qué debe entenderse por beneficios sociales, ni la forma de calcularlos -mucho menos en el procedimiento concursal).

Por tanto, no cabe inaplicar normas de la LGSC, como lo hizo la Sentencia de Segunda Instancia, ya que las mismas no vulneran la Constitución.

## **5. POSICIÓN SOBRE LAS RESOLUCIONES**

### ***Posición sobre el modo en que fue resuelto***

Conforme a lo que he indicado en el presente informe, existieron tres (3) resoluciones que resolvieron la controversia.

En tal sentido, a continuación, mi posición respecto de cada una de ellas:

#### **1. Sentencia de Primera Instancia**

##### ***Resolución N° 10 - Sentencia emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima***

De la revisión de la Sentencia de Primera Instancia – Resolución N° 10 – y de los argumentos que lo sustentan, estoy de acuerdo con que se haya declarado INFUNDADA la demanda interpuesta, toda vez que el reconocimiento de créditos laborales y de beneficios sociales sobre la base del cálculo de la Remuneración Máxima Asegurable para efectos del pago de primas del Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio no sería aplicable a un procedimiento concursal en los que se debe determinar la composición real de la masa de acreedores, pues al reconocerse un crédito cuyo monto fue liquidado sobre una base presunta se estaría reconociendo un crédito probablemente excesivo y en definitiva irreal, lo cual constituye un perjuicio para la empresa concursada como para los restantes acreedores que sí invocaron un crédito cierto.

Sobre el particular, hemos indicado que el principio de Colectividad tiene como objetivo buscar la participación concursal generando un beneficio social, así como señalar que

el interés colectivo de la masa de acreedores se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor.

Ahora bien, dicha norma debe ser contrastada con lo establecido en los artículos 148, 154 y 155 de la Resolución N° 080-98-EF/SAFP, a efectos que mediante una concordancia práctica obtengamos como resultado que dichas normas no son contradictorias sino complementarias en el sentido de interpretar correctamente la negligencia del empleador cuando éste no declare los montos adecuados para la cuantificación de pensiones y beneficios sociales ciertos.

Finalmente, el juzgado a cargo indica haber quedado acreditado que la Resolución materia de impugnación no ha incurrido en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, motivo por la cual la demanda es desestimada.

## **2. Sentencia de vista**

### ***Resolución – Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia***

De la revisión de la Resolución citada, se observa que REVOCA la Sentencia de primera instancia y REFOMÁNDOLA la declara FUNDADA, debo indicar que me encuentro en disconformidad con este fallo, por los fundamentos que pasare a exponer a continuación:

Refiere que, al presente caso le resulta pertinente la aplicación de lo dispuesto por el numeral 42 de la Ley del Sistema Concursal el mismo que reza que en los procedimientos de disolución y liquidación el orden de preferencia en el pago de los créditos es el siguiente: primero Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al sistema privado de pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la ONP, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador.

Finalmente, concluye indicado que los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones tienen el mismo orden de prelación que los beneficios sociales

Al respecto, indicamos no estar conformes pues hacen una evaluación superficial sobre el asunto, es decir, no se analiza los alcances de los artículos 148, 154 y 155 de la Resolución N° 080-98-EF/SAFP, ni los artículos V, 38 y 42 de la Ley General del Sistema Concursal, normas que -haciendo una interpretación sistemática y evaluando la concordancia práctica- no se contraponen en el caso en concreto al artículo 24 de



la Constitución, pues dicho error in iudicando cometido por el Ad quem, lleva a determinar que una cuantificación apropiada sobre el cálculo de beneficios sociales puede efectuarse sobre la remuneración máxima asegurable del seguro, colisionando el interés general en el procedimiento concursal.

**3. Sentencia – CAS N° 427-2009 expedido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República**

La Corte Suprema declara fundado el recurso casación, en consecuencia, declara nula la sentencia de vista y confirma la sentencia de primera instancia.

Al respecto, se evidencia el error in iudicando, de manera que el reconocimiento de los citados créditos de origen previsional debía ser llevado a cabo sobre la base de sumas reales y percibidas efectivamente por el trabajador, mas no sobre sumas ficticias o presuntas asumidas por el acreedor, lo que de ser así, en este último caso, supondría un perjuicio en el deudor y los demás acreedores, por lo tanto, se ha incurrido en la causal de aplicación indebida del artículo 24 de la Constitución y del artículo 42 numeral 1 de la Ley N° 27809 Ley del Sistema Concursal, en tanto no está debidamente acreditado que los trabajadores hayan percibido efectivamente los citados beneficios laborales.

Como es de advertirse, la infracción normativa es evidente y se manifiesta en el extremo de aplicar indebidamente el artículo 24 de la Constitución, así como el artículo 42 de la Ley General del Sistema Concursal, dicho vicio afecta la sentencia de vista, de tal manera que no analiza a fondo la controversia, pues sabemos que dentro de la características de la Constitución es que ella es incompleta (necesita de regulación legislativa para la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, en este caso los derechos de créditos de los otros acreedores del procedimiento concursal), es imprecisa (del mismo artículo 24 se advierte que no establece qué debe entenderse por beneficios sociales, ni la forma de calcularlos -mucho menos en el procedimiento concursal).

**6. ANEXOS**

**ANEXO 1:** Demanda de sobre Impugnación de Resolución Administrativa en contra del INDECOP y Velgei en liquidación

**ANEXO 2:** Copia del registro único de contribuyentes de Demandante

- ANEXO 3:** Copia de la solicitud de reconocimiento de créditos en el procedimiento ordinario concursal señalado
- ANEXO 4:** Copia de las Resoluciones actuadas en la vía administrativa
- ANEXO 5:** Contestación de demanda por el INDECOPI
- ANEXO 6:** Sentencia de Primera Instancia
- ANEXO 7:** Recurso de apelación
- ANEXO 8:** Sentencia de Vista
- ANEXO 9:** Escrito de interposición de recurso extraordinario de casación
- ANEXO 10:** Sentencia – CAS N° 427-2009.

## **7. BIBLIOGRAFIA**

- Lizárraga Vera-Portocarrero, 2009, *«Unas de Cal, Otras de Arena»: A Propósito de las Modificaciones al Orden de Preferencia de Pago a los Acreedores*, Lima: Derecho & Sociedad Núm. 32
- Calle Casusol Jean Paul, 2006, *Persecutoriedad laboral, garantías reales y concurso: un modelo para desarmar*, Lima: IUS ET VERITAS
- Jimenez Murillo, Roberto, 2011, Los principios de impulso de oficio y verdad material en el procedimiento administrativo, Lima: Derecho PUCP N° 67.
- Echeandía Chiappe Luis Francisco, 2001, *Odisea concursal y crisis empresarial: verdades, mentiras y leyendas tras el mito de una ley con fama de flotador*, Lima: Ius Veritas N° 22.
- Rubio Correa Marcial, 2011, *El Sistema Jurídico: Introducción al derecho*, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Castellanos Sánchez, Luis Fernando, 2009, *Las mil y una noches del derecho concursal, unos objetivos y principios de cuento*, Lima: Themis N° 57.

